

31ª REUNION — 23ª SESION ORDINARIA (Continuación) — 30 DE OCTUBRE DE 1986

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
doctor VÍCTOR HIPÓLITO MARTÍNEZ

Secretarios: doctores ANTONIO J. MACRIS y LEONARDO JUSTO PALOMEQUE

Prosecretarios: doctor ALBERTO J. B. IRIBARNE y señor DESIDERIO LAUREANO ALMIRÓN

SENADORES PRESENTES:

ALMENDRA, Ramón A.
AMOEDO, Julio A.
BENITEZ, Alfredo L.
BERHONGARAY, Antonio T.
BITTEL, Deolindo F.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO HERRERA, Horacio F.
BRITOS, Oraldo N.
DE LA ROA, Fernando
FALSONE, José A.
FERIS, Gabriel
GASS, Adolfo
GIL, Francisco
GOMEZ CENTURION, Carlos F.
GURDULICH de CORREA, Liliana I.
JIMENEZ MONTILLA, Arturo I.
LAFFERRIERE, Ricardo E.
LECONTE, Ricardo G.
LEÓN, Luis A.
MALHARRO de TORRES, Margarita
MARINI, Celestino A.
MARTIARENA, José H.
MATHUS ESCORIHUELA, Miguel A.

MAUHUM, Fernando H.
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MURGUIA, Edgardo P. V.
NAPOLI, Antonio O.
NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison
RIVAS, Olijela del Valle
RODRIGUEZ SAA, Alberto J.
SAADI, Vicente L.
SANCHEZ, Libardo N.
SIGAL, Humberto C.
SOLANA, Jorge D.
TRILLA, Juan
VELAZQUEZ, Héctor J.
VIDAL, Manuel D.
VILLADA, Francisco R.

AUSENTES, CON AVISO:

CASTRO, Jorge A.
CONCHEZ, Pedro A.
SALIM, Luis
SAPAG, Elías

AUSENTE CON LICENCIA:

CELLI, Felipe

SUMARIO

I. Asuntos entrados:

- I. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se comunica la rectificación de los límites del área que ocupará la nueva Capital Federal. (P.E. 417/86). (Pág. 4127.)
- II. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 4128.)
- III. Comunicación de un señor senador. (Página 4155.)
- IV. Dictámenes de comisiones. (Pág. 4155.)
- V. Proyecto de comunicación del señor senador Velázquez por el que se habilita una delegación de la Secretaría de Transportes en Posadas, Misiones. (S.-840/86). (Pág. 4157.)
- VI. Proyecto de resolución del señor senador Velázquez por el que se establece el horario para la iniciación de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Honorable Senado. (S.-841/86). (Pág. 4157.)
- VII. Proyecto de ley de patentes del señor senador Feris. (S.-842/86). (Pág. 4158.)
- VIII. Proyecto de comunicación de los integrantes de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública por el que se declara de interés nacional el XXVI Congreso de la Sociedad Argentina de Urología y el XVIII Congreso de la Confederación Argentina de Urología. (S.-843/86). (Pág. 4166.)
- IX. Proyecto de ley del señor senador Lafferrère por el que se establece el régimen de promoción de carreras, créditos y radicación para profesionales universitarios recién egresados. (S.-844/86). (Pág. 4166.)
- X. Proyecto de comunicación del señor senador Feris por el que se piden informes acerca del Plan Megatel instrumentado por ENTEL. (S.-845/86). (Pág. 4168.)
- XI. Proyecto de ley del señor senador Velázquez por el que se transfiere un inmueble a la provincia de Misiones. (S.-846/86). (Página 4168.)
- XII. Proyecto de comunicación del señor senador Lafferrère por el que se solicita la reforma del decreto 464/77 referente a migraciones. (S.-847/86). (Pág. 4169.)
2. Moción del señor senador Gass para que se invite a ingresar al recinto al señor canceller. Moción del señor senador Menem para que se pase a sesión secreta. Se aprueban. (Pág. 4170.)
3. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se establece un régimen de normalización impositiva. (C.D.-200/86). Se aprueba con modificaciones. (Pág. 4170.)
4. Moción de preferencia formulada por el señor senador Brasco para considerar en la sesión de mañana el proyecto de ley en revisión por el cual se crea el Fondo de Garantía de Créditos Laborales. (C.D.-314/86). (Se aprueba. (Pág. 4206.)
5. Moción de preferencia formulada por el señor senador Solana para considerar en la sesión de mañana el proyecto de ley en revisión sobre extensión del plazo acordado a mercaderías que se encuentran bajo el régimen de importación temporaria en la provincia de Neuquén pertenecientes a la Seismograph Service Corporation. (C.D.-100/86). Se aprueba. (Pág. 4206.)
6. Moción del señor senador Rodríguez Saá para retirar la cuestión de privilegio que planteara contra el Movimiento Popular Provincial de San Luis. (S.-627/86). Se aprueba. (Pág. 4207.)
7. Mociones de preferencia formuladas por el señor senador Britos para considerar en la sesión de mañana el proyecto de ley en revisión por el que se crea la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social y para el proyecto de ley en revisión por el que se otorga licencia especial a los trabajadores que se desempeñan en relación de dependencia y hubieren cumplido treinta años de servicios continuos. (C.D. 178 y 150/86). Se aprueban. (Pág. 4207.)
8. Manifestaciones del señor senador Velázquez respecto a los pedidos de preferencia. (Pág. 4207.)
9. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la cuestión de privilegio planteada por el señor senador Menem con motivo de una publicación aparecida en el diario "El Independiente", de La Rioja (S.-518/86). Se aprueba. (Pág. 4207.)
10. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura y Ganadería en el proyecto de ley en revisión por el que se prorroga el régimen establecido por el artículo 1º de la ley 22.817 (incentivo fiscal a la producción agropecuaria) (C.D.-193/86). Se aprueba. (Pág. 4210.)
11. Manifestaciones de la Presidencia y varios señores senadores respecto al plan de labor a desarrollar. (Pág. 4211.)
12. Consideración del proyecto de ley en segunda revisión de modificación de la ley 21.541 (normas para la implantación de órganos y materiales anatómicos) (C.D.-314/84). Se aprueba. (Pág. 4212.)
13. A moción del señor senador León se resuelve postergar hasta mañana el tratamiento del proyecto de ley en revisión sobre reglamentación de la actividad boxística (C.D.-198/84) (Pág. 4218.)
14. A moción del señor senador Trilla se resuelve postergar hasta mañana el tratamiento del proyecto de ley, en revisión, sobre creación de un impuesto sobre la actividad hípica (C.D.-105/86). (Pág. 4218.)

15. A moción del señor senador Brasesco se resuelve postergar hasta mañana el tratamiento del proyecto de ley de los señores senadores Amodeo, Sandi y Gurdulich de Correa referido a la expropiación de diversos bienes que fueron propiedad del general Juan Domingo Perón, y a su declaración como monumentos históricos nacionales (S.-676/86). (Página 4218.)
16. A moción del señor senador Jiménez Montilla se resuelve postergar hasta mañana el tratamiento del proyecto de ley en revisión por el que se modifica el Código Penal en lo que respecta al hurto de mercaderías transportadas (C.D.-33/86). (Pág. 4221.)
17. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General y de Interior y Justicia en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley por el que se modifica el Código de Procedimientos en Materia Penal (S.-386/84). Se aprueba. (Pág. 4221.)
18. Consideración del dictamen de las comisiones de Interior y Justicia y de Legislación General en el proyecto de ley del señor senador Berhongaray por el que se sustituyen diversos artículos del Código de Procedimientos en Materia Penal, en lo relativo al auto de procesamiento (S.-69/86). Se aprueba. (Pág. 4222.)
19. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley por el que se equipara, únicamente a los efectos previsionales, la situación de las personas desaparecidas entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, a la muerte del jubilado o del afiliado en actividad o con derecho a jubilación (S.-457/86). Se aprueba. (Página 4225.)
20. Consideración del dictamen de las comisiones de Interior y Justicia, de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Familia y Minoridad en los proyectos de ley de la señora senadora Rivas y de los señores senadores de la Rúa y Trilla por los que se establece el funcionamiento de los tribunales de familia de la Capital Federal (S.-537 y 656/86). Se aprueba. (Pág. 4227.)
21. Consideración del proyecto de ley de los señores senadores Falsone y Malharro de Torres sobre creación de la Comisión Nacional para las Personas Discapacitadas en el área del Poder Ejecutivo nacional (S.-422/86). Se aprueba. (Pág. 4233.)
22. A moción del señor senador Mauhum se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión por el cual se restituye un inmueble a la Municipalidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba (C.D.-496/86) (Pág. 4239)
23. Manifestaciones del señor senador Berhongaray respecto al tratamiento sobre tablas de un proyecto. (Pág. 4241.)
24. Consideración del proyecto de comunicación de los señores senadores Martiarena y Benítez sobre suspensión de la venta de bienes que aún forman

parte del patrimonio de la Flota Fluvial del Estado Argentino (S.-539/86). Se aprueba. (Pág. 4241.)

25. A moción del señor senador Brasesco se resuelve postergar hasta mañana el tratamiento del proyecto de ley en revisión sobre transferencia a la Municipalidad de Gualeguaychú, con carácter de donación, de un inmueble ubicado en la ciudad del mismo nombre, provincia de Entre Ríos, perteneciente al Ejército Argentino (C.D.-66/86). (Pág. 4241.)
26. Manifestaciones de los señores senadores Velázquez y Bravo Herrera sobre el tratamiento de un proyecto de ley de transferencia de tierras a la provincia de Misiones (S.-846/86). (Pág. 4242.)
27. Consideración del dictamen de las comisiones de Defensa Nacional, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley por el cual los integrantes de las fuerzas armadas deberán prestar juramento de fidelidad y respeto a la Constitución Nacional (S.-653/84). Se aprueba. (Pág. 4243.)
28. Consideración del proyecto de ley de los señores senadores Martiarena y Benítez por el que se incorpora al personal del Cuerpo de Guardaparques Nacionales al régimen previsional previsto en el decreto ley 15.943. Se aprueba (S.-800/86). (Página 4244.)
29. Moción del señor senador Leconte de levantar la sesión. A sugerencia de la Presidencia se resuelve pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 10. Se aprueba. (Pág. 4246.)
30. Apéndice.
 - I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 4246.)
 - II. Inserción. (Pág. 4251.)

—En Buenos Aires, a las 13 y 16 del jueves
30 de octubre de 1986.

Sr. Presidente. — Continúa la sesión.

Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee):

1

ASUNTOS ENTENDADOS

I

Rectificación de los límites del área que ocupará la nueva capital federal. — Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 28 de octubre de 1986.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de informarle que, de acuerdo a las variantes introducidas en las respectivas leyes de cesión

- d) Retornen al país en calidad permanente para concluir carreras, estudios o capacitación profesional de características análogas a las indicadas en el inciso b);
- e) Existieren otras causales excepcionales debidamente probadas y fundadas que hicieren razonable la aplicación del referido criterio.

Sin perjuicio de ello, se estimaría conducente para el logro de los objetivos emergentes de la propuesta de reforma, disponer los temperamentos necesarios para una adecuada publicidad y difusión en el exterior del nuevo texto normativo —cuyo espíritu se postula— para la hipótesis de ser acogida favorablemente la presente comunicación.

Ricardo E. Lafferrère.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El estímulo para el retorno al suelo patrio de los argentinos residentes en el exterior tiene por fin tuitivo recomponer el potencial humano de la Nación en aquellas áreas y actividades que comprometen al futuro de nuestra sociedad.

Creemos que la propuesta contenida en este proyecto tiende a agilizar los trámites del reingreso y retorno a la República Argentina, garantizando un procedimiento más eficaz por su rapidez mayor que el existente actualmente, habida cuenta de la inmediatez y las facultades resolutorias en cabeza del cónsul argentino.

La simplificación burocrática, unida a la garantía de un debido procedimiento administrativo —mediante el sistema recursivo sugerido— constituirán elementos de juicio y ponderación de particular atención en el momento de la toma de decisión para el regreso de aquellos argentinos valiosos y ausentes hoy en nuestro territorio.

Por las razones apuntadas hemos también puesto especial atención a la previsión de un adecuado régimen de publicidad y difusión dirigido a la colonia argentina en el exterior para su adecuado conocimiento de las modificaciones, una vez decretadas las mismas.

Los instrumentos normativos objeto de la revisión y reformulación de mención en el proyecto son el ya referido decreto 464/77 (pub. B.O. 1-3-77) y la resolución 568 de la Subsecretaría de Asuntos Institucionales, dictada en su consecuencia, (pub. B.O. 18-4-77), la cual en su artículo 4º, especialmente, también debería ser reformada, toda vez que condiciona a los argentinos que retornaren del exterior el otorgamiento de los beneficios del decreto 464/77 a la espera de 180 días de producido el regreso.

Ricardo E. Lafferrère.

—A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

2

SESION SECRETA

Sr. Gass. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Gass. — Señor presidente: hago indicación para que se invite a ingresar en el recinto al señor canciller, que se encuentra en antesalas.

Sr. Menem. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: el honorable cuerpo debe resolver si la sesión será pública o secreta. Hago moción concreta para que sea secreta.

Sr. Presidente. — En consideración la moción del señor senador por La Rioja.

Sr. Gass. — Señor presidente: aceptamos la moción formulada por el señor senador Menem.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consecuencia, invito al señor senador Gass, para que junto con el señor jefe de Ceremonial, inviten al señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto y a los funcionarios que lo acompañan a tomar ubicación en el recinto.

Sr. Gass. — Solicito que se amplíe la delegación con el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, señor senador Amoedo.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Como hay asentimiento, se procederá en consecuencia.

Invito al cuerpo a pasar a sesión secreta.

—Son las 13 y 18.

—A las 18 y 33.

Sr. Presidente. — Continúa la sesión.

3

REGIMEN DE NORMALIZACION IMPOSITIVA

Sr. Presidente. — Corresponde la consideración del dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda que tenía preferencia para hoy en el proyecto de ley en revisión por el que se establece un régimen de normalización impositiva.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee):

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de ley en revisión C.D. 200/86

estableciendo un régimen de normalización impositiva; y por las razones que dará el miembro informante os aconseja su aprobación con las siguientes modificaciones:

1º— Modificar el inciso a) del artículo 4º agregando al final del segundo párrafo la expresión "y se pruebe su inversión a destino".

2º— Sustitúyese el artículo 8º por el siguiente:

Artículo 8º: Para el cálculo del impuesto especial de normalización deberá aplicarse a la base imponible las alícuotas que para cada caso se fijan a continuación:

a) Personas físicas, sucesiones indivisas y sociedades comprendidas en el tercer párrafo del artículo 1º de la ley.

0	20.000	—	2 %	—
20.000	60.000	400	4 %	20.000
—60.000	160.000	2.000	6 %	60.000
160.000	400.000	8.000	8 %	160.000
400.000	—	27.200	10 %	400.000

b) Para los demás obligados: diez por ciento (10 %).

3º— Sustitúyese el artículo 11 por el siguiente:

Artículo 11: Para que la normalización a que se refiere este capítulo tenga validez, deberán presentarse las declaraciones juradas y efectuarse el pago del impuesto en el tiempo y forma que establezca la Dirección General Impositiva, la que queda facultada para disponer planes de facilidades de pago en cuotas actualizables, con un interés que no podrá exceder el establecido para deudas actualizadas, y para disponer pagos a cuenta o anticipos del impuesto especial que en definitiva resulte.

Una vez vencido el plazo que establezca dicho organismo para la presentación de las respectivas declaraciones juradas, éstas tendrán carácter definitivo para el contribuyente y sólo podrán ser modificadas por errores de cálculo cometidos en los mismos formularios.

4º— Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:

Artículo 28: Quedan excluidos de la presente normalización:

- Los impuestos previstos en los artículos 23 y 23 bis —incorporado por la ley 23.102— de la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1979 y sus modificaciones;
- El monto del impuesto resultante de declaraciones juradas presentadas por los responsables o contribuyentes con anterioridad a la fecha de publicación de esta ley en el Boletín Oficial;
- El impuesto resultante de las determinaciones efectuadas por la Dirección General Impositiva que se encuentren firmes a la fecha indicada en el inciso anterior.

No se considerarán comprendidas en este punto las intimaciones de pago realizadas de

conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones. A los fines previstos en este inciso, será de aplicación lo establecido por los párrafos segundo y tercero del punto 2 del inciso b) del artículo 3º del capítulo I.

5º— Modifícase en el artículo 29 los siguientes incisos:

- (Último párrafo). Los importes así establecidos para los períodos fiscales comprendidos en cada año calendario se sumarán sin actualizar;
- El importe actualizado que resulte para cada período fiscal o año calendario, se reducirá en los porcentajes que para cada caso se fijan a continuación:

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Período fiscal	Porcentaje de reducción
1984 y anteriores	75
1985 Ejercicios cerrados hasta el mes de mayo, inclusive	75
1985 Ejercicios cerrados a partir del mes de junio, inclusive	55
1984 y anteriores	75
1985	55

6º— El artículo 31 se suprime.

7º— Sustitúyese el artículo 32 por el siguiente:

Artículo 32: Para que la normalización a que se refiere el presente capítulo tenga validez, deberán presentarse las declaraciones juradas y efectuarse el pago del impuesto en el tiempo y forma que establezca la Dirección General Impositiva, la que queda facultada para disponer planes de facilidades de pago en cuotas actualizables, con un interés que no podrá exceder el establecido para deudas actualizadas, y para disponer pagos a cuenta o anticipos del impuesto especial que en definitiva resulte.

Una vez vencido el plazo que establezca dicho organismo para la presentación de las respectivas declaraciones juradas, éstas tendrán carácter definitivo y sólo podrán ser modificadas por errores de cálculo cometidos en los mismos formularios.

8º— En el capítulo III sustitúyese el artículo 36 por el siguiente:

Artículo 36: Los contribuyentes y responsables de los tributos comprendidos en los capítulos I y II, excepto los mencionados en el inciso a) del artículo 28, podrán de acuerdo con lo dispuesto por el presente capítulo, regularizar las obligaciones cuyos vencimientos se hubieren operado hasta el día 31 de agosto de 1986, inclusive, en relación a los aludidos gravámenes que surjan de:

- Declaraciones juradas presentadas o determinaciones de oficio que hubieren quedado firmes hasta el 30 de septiembre de 1986, inclusive;

- b) Anticipos, posiciones mensuales y pagos a cuenta;
- c) Retenciones o percepciones no practicadas;
- d) Multas firmes al 30 de septiembre de 1986, inclusive;
- e) Actualizaciones correspondientes a los conceptos mencionados en los incisos anteriores, excepto sobre los citados en el inciso b) que quedan liberados;
- f) Actualizaciones correspondientes al concepto mencionado en el inciso anterior.

El presente régimen comprende también las obligaciones, exteriorizadas o no, por actos o hechos impositivos formalizados hasta el día 30 de septiembre de 1986, inclusive, correspondientes al impuesto de sellos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Dirección General Impositiva, aun cuando no se requiera para su determinación la presentación de declaraciones juradas, incluidas las multas que hubieran quedado firmes a esa fecha.

Quedan incluidas en el presente régimen las obligaciones provenientes de regímenes de facilidades de pago, hubieran o no caducado los correspondientes beneficios.

El importe actualizado, que resulte para cada período fiscal o año calendario una vez aplicadas las disposiciones del decreto 1.096/85 cuando correspondiere, se reducirá en los porcentajes que para cada caso se fijan a continuación:

Periodo fiscal	Porcentaje de reducción
1984 y anteriores	15
1985 Ejercicios cerrados hasta el mes de mayo, inclusive	15
1985 Ejercicios cerrados a partir del mes de junio, inclusive	10
1986 Ejercicios cerrados hasta el mes de mayo, inclusive	5

9º — En el artículo 37 donde dice 30/6/86 llevar al 30/9/86.

10. — Agregar en el artículo 41 lo siguiente como segundo párrafo:

El importe actualizado, que resulte para cada período fiscal o año calendario una vez aplicadas las disposiciones del decreto 1.096/85 cuando correspondiere, se reducirá en los porcentajes que para cada caso se fijan a continuación:

Periodo fiscal	Porcentaje de reducción
1984 y anteriores	15
1985 Ejercicios cerrados hasta el mes de mayo, inclusive	15
1985 Ejercicios cerrados a partir del mes de junio, inclusive	10

Sobre los saldos de impuesto que se determinen no procederá la aplicación de los intereses y sanciones

previstos en la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones.

11. — Sustitúyese el artículo 42 por el siguiente:

Artículo 42. — Los contribuyentes y responsables podrán presentar las declaraciones juradas omitidas o, en su caso, rectificar las que hubieran presentado, por los impuestos indicados en los artículos 2º, 27 y 41, correspondientes a los períodos fiscales posteriores a los comprendidos en la normalización dispuesta por los capítulos I y II, a fin de quedar liberados en relación con las diferencias de impuestos no ingresadas de:

- a) Los intereses y multas que pudieran corresponder, cuando el vencimiento para la presentación de la respectiva declaración jurada hubiera operado hasta el 31 de agosto de 1986, inclusive;
- b) Las multas que pudieran corresponder, cuando el vencimiento hubiera operado a partir del 1º de julio de 1986 y hasta la fecha de publicación de esta ley en el Boletín Oficial.

Esta liberación sólo alcanza a las presentaciones de declaraciones juradas originales o rectificativas, e ingresos que se efectúen hasta la fecha de vencimiento que a tales fines disponga la Dirección General Impositiva. A las pre-entadas declaraciones no les será de aplicación lo establecido en los incisos b) y c) del artículo 16.

También quedan comprendidos en las disposiciones de este artículo, los contribuyentes y responsables que no habiéndose acogido a las disposiciones de los capítulos I y II y del artículo 41, cumplan con lo establecido en el párrafo anterior.

Las obligaciones tributarias que surjan en virtud de lo dispuesto en los artículos 41 y en el presente podrán ser canceladas mediante los planes de facilidades de pago previstos en los artículos 11 y 32 de la presente ley.

12. — Sustitúyese el artículo 44 por el siguiente:

Artículo 44. — No corresponderá efectuar ajuste alguno a los importes de los anticipos de los impuestos a las ganancias, sobre los capitales y sobre el patrimonio neto, que hubieran sido determinados sobre la base de declaraciones juradas presentadas con anterioridad a la fecha de vencimiento que se fije para la presentación de las declaraciones juradas de normalización y regularización previstas en los capítulos I, II, III y IV.

Asimismo quedan condonados los intereses y actualizaciones no ingresados correspondientes a los anticipos de los mencionados impuestos que hubieren vencido hasta la fecha de publicación de esta ley en el Boletín Oficial. Esta condonación no alcanza a la parte proporcional del anticipo que correspondiere a ajustes de declaraciones juradas que realice la Dirección General Impositiva después de vencidos los plazos de normalización y regularización.

Igual tratamiento y con los mismos efectos se dispensará a los intereses y actualizaciones no ingresados correspondientes a:

1. Posiciones mensuales y anticipos del impuesto al valor agregado vencidos hasta el 31 de octubre de 1986.
2. Impuestos internos: por períodos fiscales vencidos hasta el 31 de octubre de 1986.

Lo dispuesto precedentemente será de aplicación para todos los contribuyentes estuyeren o no comprendidos en las disposiciones de los capítulos I, II y III de la presente ley.

13. — Sustitúyese el artículo 50 por el siguiente:

Artículo 50. — El producido del impuesto especial de normalización que se establece en los capítulos I y II se destinará:

- a) El tres por ciento (3 %) a la Dirección General Impositiva para ser aplicado al desarrollo de su infraestructura y a la modernización de su capacidad operativa, por sobre los niveles que fije, con carácter general, el Poder Ejecutivo para la administración pública nacional en el ejercicio 1987;
- b) El noventa y siete por ciento (97 %) restante se distribuirá entre la Nación y las provincias adheridas al régimen de coparticipación federal de impuestos en la forma y proporciones que el mismo establezca para cada una de ellas.

Hasta tanto entre en vigencia el régimen mencionado en el párrafo precedente, el monto establecido en este inciso se asignará de la siguiente forma:

1. El cincuenta por ciento (50 %) será atribuido a la Nación.
2. El cincuenta por ciento (50 %) se atribuirá a las provincias en forma directamente proporcional a los importes que se le asignen a cada una de ellas en el régimen vigente cada año para la distribución transitoria de recursos federales a las provincias.

La distribución de los fondos se hará en forma automática en la medida de su percepción.

14. — Al artículo 53 efectuar las siguientes modificaciones:

1. Sustituir el inciso i) del punto 4 por el siguiente:
 - i) Administrar el presupuesto, autorizando y aprobando los gastos e inversiones del organismo. Podrá redistribuir los créditos a nivel de incisos, partida principal, parcial y proyectos del plan analítico de trabajos públicos, sin alterar el monto total asignado, en la medida en que el Poder Ejecutivo esté facultado para ello.
2. Se incorpora al final del inciso i) después del punto seguido lo siguiente: "Queda exceptuada de esta facultad la venta de inmuebles".
3. Se suprime el punto 6.
4. En el antepenúltimo párrafo se suprime la expresión "y manejo".

15. — Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 54:

1. En el punto 3 donde dice "sesenta por mil (60 %)" debe decir "treinta por mil (30 %)".
2. En el punto 6 agregar como inciso g) el siguiente:

g) Las operaciones comprendidas en el artículo 93 de la ley 11.672.

16. — Sustitúyese el artículo 56 por el siguiente:

Artículo 56. — La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, excepto para las sustituciones de los artículos 3º, 5º, 6º y 114 de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, dispuesta por los puntos 1, 2, 4 y 7 del artículo 53, que serán aplicables a partir del ejercicio presupuestario 1987.

17. — Incorpórase como nuevo capítulo a continuación del capítulo IV del título I, el siguiente:

CAPÍTULO V

Exteriorización de capitales con destino a la reactivación del aparato productivo nacional

Art. ... — Los sujetos y responsables comprendidos en el capítulo I, que normalicen su situación tributaria conforme al régimen establecido en el mismo, exteriorizando capitales —en moneda extranjera o australes— que destinen a inversiones que tengan como finalidad la reactivación del aparato productivo nacional, podrán acogerse a las disposiciones del presente capítulo.

Art. ... — Los fondos exteriorizados solamente podrán disponerse para alguno de los siguientes destinos:

- a) Adquisición de unidades automotores nuevas destinadas al transporte de carga general o al de pasajeros, excluidos los automóviles;
- b) Construcción o compra de unidades nuevas de vivienda común o económica de acuerdo a las disposiciones de la resolución 368/76 del 13 de octubre de 1976, de la entonces Secretaría de Estado de Vivienda y Urbanismo;
- c) Adquisición de bienes de uso nuevos de origen nacional excluidos los automóviles;
- d) Importación o adquisición de bienes de uso nuevos de origen extranjero que no se fabriquen en el país y que sean debidamente autorizados por la autoridad competente;
- e) Suscripción e integración de acciones de sociedades cuyos títulos coticen en bolsa, las que deberán aplicar estos fondos a los fines previstos en los restantes incisos de este artículo;
- f) Suscripción de títulos, cédulas u otros certificados equivalentes emitidos o que emita el Banco Hipotecario Nacional;
- g) Construcción de hoteles o complejos, turísticos.

Art. ... — El importe de las disponibilidades deberá depositarse en las entidades financieras que a esos efectos determine el Banco Central de la República Argentina antes de la fecha de vencimiento que se fije para la presentación de las declaraciones juradas de normalización, en las condiciones que disponga la citada entidad rectora.

Art. ... — Los depósitos deberán efectuarse en australes (A) o en dólares estadounidenses (u\$s) y devengarán un interés pagadero al momento del retiro total de los fondos. La tasa del mencionado interés será fijada por el Banco Central de la República Argentina, no pudiendo ser inferior:

- a) Para depósitos en moneda nacional: la tasa de interés pasiva no regulada que aplique el Banco de la Nación Argentina para depósitos a plazo fijo a treinta (30) días;
- b) Para depósitos en dólares estadounidenses: una tasa equivalente a la tasa Libor a treinta (30) días para dólares estadounidenses.

Art. — El total de los importes depositados, incluidos los intereses que éstos devenguen, deberá aplicarse a los destinos previstos en el presente capítulo en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses, debiendo tener la inversión principio de ejecución dentro de los seis (6) meses, ambos plazos contados desde la fecha de imposición del respectivo depósito.

Estos plazos podrán ser ampliados por la Dirección General Impositiva a solicitud del responsable en los casos debidamente justificados.

Art. — La liberación prevista de los fondos depositados se hará en todos los casos en australes (A). A tal efecto, para el caso de los depósitos en moneda extranjera el Banco Central de la República Argentina deberá efectuar las operaciones de compra utilizando para la conversión el tipo de cambio que se le pida para el denominado dólar-turista o dólar-pasaje o el equivalente que lo sustituya en el último día hábil anterior a la fecha de la liberación de los mencionados depósitos.

Art. ... — El retiro total o parcial de los fondos sólo podrá efectuarse previa autorización de la Dirección General Impositiva, a cuyo efecto los contribuyentes comprendidos en este capítulo deberán solicitar a dicho organismo la liberación de los fondos explicitando el destino que se dará a los mismos en la forma y condiciones que dicho organismo determine.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, los responsables comprendidos deberán aportar a la Dirección General Impositiva, dentro del plazo que establezca, la documentación que pruebe la inversión realizada.

Art. — En el caso que la inversión no tuviere principio de ejecución dentro del plazo previsto o las sumas depositadas no se hubieren —total o parcialmente— invertido en las condiciones fijadas en el presente régimen, se producirá el decaimiento del beneficio en la proporción que represente el remanente no utilizado.

Producido el decaimiento —total o parcial— de los beneficios acordados en este capítulo, el importe correspondiente a la reducción del impuesto especial indebidamente computado, deberá ingresarse con más las actualizaciones e intereses previstos en la ley 11.683, t.o. en 1978 y sus modificaciones.

Art. ... — Los sujetos que se acojan al presente capítulo gozarán de una rebaja equivalente al cinco por ciento (5 %) del incremento de la obligación tributaria motivada por la incorporación de los capitales previstos en este capítulo.

Art. — Lo establecido en el presente capítulo deberá ser reglamentado por el Poder Ejecutivo dentro de los sesenta (60) días de la promulgación de esta ley, quedando asimismo facultado para dictar las normas complementarias que hagan al cumplimiento de los objetivos previstos en el mismo.

18. — Se adecuarán las referencias, capítulos, citas y numeración de artículos a las modificaciones propuestas.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 102 del Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 30 de octubre de 1986.

Juan Trilla. — Edgardo P. V. Murguía. —
Rogelio J. Nieves. — Fernando de la Rúa.
— Julio A. Amoedo.

ANTECEDENTE

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados

(23 de octubre de 1986)

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TÍTULO I

Normalización tributaria

CAPÍTULO I

Régimen de normalización de los impuestos a las ganancias, sobre los beneficios eventuales, sobre los capitales, sobre el patrimonio neto y otros

Artículo 1º — Las personas físicas, sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 63 de la ley de impuesto a las ganancias, según texto vigente anterior a las modificaciones introducidas por la ley 23.260, insertos o no en el referido impuesto, que durante los períodos fiscales finalizados hasta el 31 de diciembre de 1985, inclusive, hubieran obtenido incrementos patrimoniales o hubieran dispuesto o consumido bienes, originados en ganancias o beneficios omitidos a los fines de la determinación de los impuestos a las ganancias o sobre los beneficios eventuales, podrán normalizar su situación tributaria de acuerdo con el régimen que se establece en el presente capítulo.

Las personas físicas y sucesiones indivisas incluirán en su normalización los incrementos patrimoniales y los bienes dispuestos o consumidos, que reconozcan su ori-

gen en ganancias o beneficios de las empresas o explotaciones, unipersonales, de las que sean o hubieran sido titulares.

Las sociedades que resulten comprendidas en el inciso b) del artículo 48 de la ley y texto citado, cuando hubieran obtenido incrementos patrimoniales o efectuado disposiciones de bienes, originados en ganancias o beneficios no exteriorizados en los mencionados períodos fiscales, también deberán complementar las obligaciones que establece el presente régimen para normalizar su situación tributaria y, en su caso, la de los respectivos socios.

La presente normalización comprende los períodos fiscales no prescritos a la fecha de publicación de esta ley en el Boletín Oficial.

Art. 2º — La normalización a que se refiere el artículo anterior producirá efectos respecto de los impuestos a las ganancias, sobre los beneficios eventuales, sobre los capitales, sobre el patrimonio neto, sus respectivos gravámenes de emergencia, especial a la revaluación de hacienda, de emergencia sobre los activos financieros, sobre la transferencia de títulos valores, y sobre las ventas, compras, cambio o permuta de divisas.

Art. 3º — Quedan excluidos de la normalización los incrementos patrimoniales y las disposiciones o consumos de bienes, provenientes de:

- a) Retenciones o percepciones practicadas y no ingresadas;
- b) Determinaciones de los impuestos a las ganancias y sobre los beneficios eventuales:

1. Que resulten de declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes con anterioridad a la fecha de publicación de esta ley en el Boletín Oficial.
2. Efectuadas por la Dirección General Impositiva que se encuentren firmes a la fecha indicada en el punto anterior. No se considerarán comprendidas en este punto las intimaciones de pago realizadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones.

Los incrementos patrimoniales y las disposiciones o consumos de bienes provenientes de ganancias o beneficios comprendidos en determinaciones efectuadas por la Dirección General Impositiva, que se encuentren en discusión administrativa, contencioso administrativo o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, sólo podrán incluirse en la normalización cuando dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos contados desde esa fecha, los sujetos obligados se allanen y renuncien a toda acción y derecho, incluso el de repetición, relativos a la causa y, en su caso, asuman el compromiso de abonar las costas y costos del juicio, en la forma y condiciones que disponga dicho organismo.

Cuando los aludidos incrementos, disposiciones o consumos provengan de ganancias

comprendidas en las intimaciones de pago realizadas de acuerdo al artículo 38 de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, que hubieran dado lugar, antes de la fecha de publicación indicada, a la iniciación del juicio de ejecución fiscal previsto en dicha norma, también podrán incluirse en la normalización si dentro del plazo fijado en el párrafo anterior se solicita la regulación de los honorarios y, en su caso, la tasa de justicia del juicio y se asuma el compromiso de abonar el importe resultante.

Los honorarios que correspondan a los representantes del fisco se reducirán en un cincuenta por ciento (50 %), no pudiendo en ningún caso ser inferiores al arancel mínimo. El ingreso de dichos honorarios podrá ser efectuado mediante un plan de facilidades de pago, en el tiempo, forma y condiciones que disponga la Dirección General Impositiva.

Art. 4º — A fin de normalizar su situación tributaria, respecto de los incrementos patrimoniales y de los bienes dispuestos o consumidos, no justificados de conformidad con los artículos 6º y 7º, los sujetos obligados deberán determinar la base imponible del impuesto especial de normalización previsto en el artículo 8º, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- a) Determinación del monto del patrimonio neto no justificado situado en el país: se establecerá el patrimonio neto no justificado, existente a la fecha de cierre del último ejercicio comercial cuyos resultados sean imputables al período fiscal 1985 o, en su caso, al 31 de diciembre de 1985, incluyendo todos los bienes, créditos y deudas situados en el país.

Las deudas contraídas con acreedores del exterior que no fueron oportunamente declaradas a los fines del impuesto a las ganancias, sólo podrán computarse cuando hubieran estado originadas en importaciones debidamente autorizadas o con intervención de autoridad competente, o en una remesa financiera del exterior en la que el ingreso y la liquidación de las respectivas divisas se hayan efectuado con la intervención de una institución financiera autorizada por el Banco Central de la República Argentina para realizar este tipo de operaciones.

Para la determinación del monto del aludido patrimonio, el total o la parte no justificada del valor de ingreso al patrimonio de los bienes, créditos y deudas que lo componen, se actualizará considerando la variación operada en el índice de precios al por mayor, nivel general, suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, aplicando el coeficiente que surja de relacionar el índice promedio del ejercicio comercial 1985 o, en su caso, del año 1985, con el índice promedio del ejercicio comercial o año, según corresponda, en que los bienes, cré-

ditos y deudas se hubieran incorporado al patrimonio;

- b) Determinación del monto del patrimonio neto no justificado situado en el exterior: establecerán las inversiones en el exterior existentes a la fecha de cierre del ejercicio comercial 1985 o, en su caso, al 31 de diciembre de 1985, originadas en ganancias o beneficios de fuente argentina por las que se hubieran omitido los impuestos a las ganancias o sobre los beneficios eventuales, considerando el valor en moneda extranjera de ingreso al patrimonio, convertido en australes de acuerdo con el último valor de cotización, tipo vendedor, del Banco de la Nación Argentina a las fechas indicadas, según corresponda;
- c) Determinación del monto de los bienes dispuestos o consumidos no justificados: se establecerá el monto de los bienes dispuestos o consumidos no justificados imputables a todos los períodos fiscales comprendidos en la normalización. A este fin el importe correspondiente a cada período fiscal se actualizará de conformidad a lo dispuesto en el inciso a), considerando el período fiscal en que se efectuó la disposición o consumo respectivo.
- Quando el monto de los bienes dispuestos o consumidos no justificados sea inferior al diez por ciento (10 %) del patrimonio neto no justificado a que se refieren los incisos a) y b), deberá computarse un importe equivalente al que resulte de aplicar este porcentaje sobre el monto del aludido patrimonio;
- d) Determinación de la base imponible: la suma de los importes que resulten por aplicación de lo establecido en los incisos precedentes constituirá la base imponible del impuesto previsto en el artículo 8º.

A los fines de lo dispuesto en los incisos a) y b) los bienes, créditos y deudas, se considerarán situados en el país o en el exterior, con arreglo a las normas de los impuestos sobre los capitales o sobre el patrimonio neto, según corresponda.

Art. 5º — Quienes normalicen su situación en los términos de este capítulo estarán obligados a detallar en la correspondiente declaración jurada de normalización el patrimonio neto total, en el país y en el exterior, existente a la fecha de cierre del ejercicio comercial 1985 o, en su caso, al 31 de diciembre de 1985, discriminando la parte del mismo no justificada y la justificada por reconocer su origen en los conceptos indicados en los artículos 6º y 7º.

A estos fines se considerará justificado el mayor valor de las acciones sin cotización en bolsa o de las participaciones sociales producido como consecuencia de la normalización efectuada por la respectiva sociedad.

Los bienes, créditos y deudas deberán informarse a los valores de incorporación al patrimonio y además al que surja de aplicar:

1. Para las personas físicas y sucesiones indivisas: las normas del impuesto sobre el patrimonio neto vigente al 31 de diciembre de 1985.

2. Para los demás obligados: las normas del impuesto sobre los capitales vigentes para el primero de los ejercicios comerciales cerrados a partir de la fecha de publicación de la ley 23.296 en el Boletín Oficial.

Art. 6º — A los fines establecidos en los incisos a), b) y c) del artículo 4º, se considerará justificada la parte del patrimonio neto y de los bienes dispuestos o consumidos, que reconozca su origen en los conceptos que se indican a continuación, imputables a los períodos fiscales comprendidos en la normalización:

- a) Ganancias o beneficios netos que resulten excluidos de la normalización, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3º;
- b) Ganancias o beneficios que hubieran tributado el impuesto a las ganancias con carácter definitivo;
- c) Ganancias o beneficios que hubieran sufrido la retención de los impuestos a las ganancias o sobre los beneficios eventuales con carácter de pago a cuenta, en tanto tales retenciones no hayan sido computadas en las determinaciones comprendidas en el artículo 3º y en la medida que correspondan a la proporción que surja de relacionar el impuesto retenido con el que hubiera debido ingresarse por dichas ganancias o beneficios. A estos efectos el impuesto que hubiera debido ingresarse se determinará:

1. Impuesto sobre los beneficios eventuales: al monto de los beneficios netos imponibles, se aplicará la tasa vigente para el período fiscal al cual correspondan.
2. Impuesto a las ganancias: al monto de las ganancias se aplicará:

—Para los sujetos comprendidos en los artículos 48, inciso b), y 63 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, según texto vigente anterior a las modificaciones introducidas por la ley 23.260, la tasa del treinta y tres por ciento (33 %).

—Para las personas físicas y sucesiones indivisas, la tasa del quince por ciento (15 %). Cuando esta tasa sea inferior a la aplicada para el cálculo de la retención a los fines previstos en este punto deberá considerarse esta última.

- d) Anticipos, pagos a cuenta y saldos a favor del contribuyente, computables en los impuestos a las ganancias y sobre los beneficios eventuales que no se hubieran incluido en las determinaciones comprendidas en el artículo 3º, en la forma que establezca la Dirección General Impositiva siguiendo un procedimiento similar al fijado en el inciso anterior;
- e) Enriquecimientos obtenidos a título gratuito por causa de herencia, legado o donación;
- f) Ganancias, beneficios o enriquecimientos, exentos, no computables o no comprendidos en el ámbito de aplicación de los impuestos a las ganancias o sobre los beneficios eventuales.

- g) Desgravaciones admitidas en los tributos mencionados en el inciso anterior;
- h) Ganancias o beneficios originados en la distribución de ganancias o beneficios efectivamente normalizados por terceros;
- i) Respecto de las sociedades, los montos efectivamente integrados por los accionistas o, en su caso, aportados por los socios durante los períodos fiscales comprendidos en la normalización, en la medida en que dichos montos se encuentren fehacientemente acreditados con la documentación correspondiente;
- j) El patrimonio neto existente al inicio del primer período fiscal no prescrito comprendido en la normalización, cuando pueda demostrarse la titularidad y existencia a esa fecha de los bienes que lo integran.

Los importes que se computen de acuerdo con lo dispuesto precedentemente deberán informarse discriminados por los conceptos a los cuales correspondan, en la forma y condiciones que disponga la Dirección General Impositiva.

Art. 7º — Asimismo, se considerará justificada la parte del patrimonio neto y de los bienes dispuestos o consumidos que reconozcan su origen en:

- a) Las sumas atribuibles a ganancias no imponibles, cargas de familia y deducción especial, que resulten computables conforme a las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias vigentes para los respectivos períodos fiscales, en la medida en que no se hubieran utilizado en la determinación de dicho impuesto y hasta el límite del importe de las ganancias netas imputables a los mismos.
- b) Las sumas atribuibles a beneficios no imponibles computables para la determinación del impuesto sobre los beneficios eventuales, en la medida en que no se hubieran utilizado en la determinación de dicho impuesto y hasta el límite del importe de los beneficios netos imputables a los respectivos períodos fiscales.

Art. 8º — Para el cálculo del impuesto especial de alicuotas deberá aplicarse a la base imponible las alicuotas que para cada caso se fijan a continuación:

- a) Personas físicas y sucesiones indivisas:

Más de \$	a \$	Monto fijo más el	excedente de Sobre el
0	100.000	—	6 %
100.000	275.000	6.000	7,5 %
275.000	600.000	19.125	9,5 %
600.000	—	50.000	12 %

- b) Para los demás obligados: doce por ciento (12 %).

Art. 9º — El monto del impuesto especial que se determine, de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, se actualizará conforme a la variación operada en el índice de precios al por mayor, nivel general,

suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, aplicando el coeficiente que resulte de relacionar el índice del penúltimo mes anterior al de la fecha de vencimiento que se fije para la presentación de la declaración jurada de normalización, con el índice del mes de cierre del último ejercicio comercial 1985 o, en su caso, del mes de diciembre de 1985.

Art. 10. — Los sujetos que cancelen su obligación al contado a la fecha de vencimiento, que fije la Dirección General Impositiva para el ingreso del impuesto especial, gozarán de un descuento del veinte por ciento (20 %) sobre el importe determinado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9º.

Art. 11. — Para que la normalización a que se refiere este capítulo tenga validez, deberán presentarse las declaraciones juradas y efectuarse el pago del impuesto en el tiempo y forma que establezca la Dirección General Impositiva, la que queda facultada para disponer planes de facilidades de pago y para establecer pagos a cuenta o anticipos del impuesto especial que en definitiva resulte.

Una vez vencido el plazo que establezca dicho organismo para la presentación de las respectivas declaraciones juradas éstas tendrán carácter definitivo para el contribuyente y sólo podrán ser modificadas por errores de cálculo cometidos en los mismos formularios.

Art. 12. — Cuando el importe de las disponibilidades, en moneda nacional y extranjera, y de los títulos públicos que se incorporen al patrimonio para la determinación de los patrimonios netos a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 4º, resulte, en total, superior al quince por ciento (15 %) del importe a que se refiere el inciso d) de dicho artículo, deberá informarse a la Dirección General Impositiva, en la forma, plazo y condiciones que la misma disponga, los movimientos operados respecto de dichas disponibilidades y títulos con posterioridad a la fecha de cierre del último ejercicio comercial 1985 o, en su caso, al 31 de diciembre de 1985.

Art. 13. — En los casos en que se incluyan acciones en el patrimonio neto a que se refiere el inciso a) del artículo 4º, tal inclusión sólo se aceptará si, con anterioridad a la fecha de vencimiento que se fije para la presentación de las declaraciones juradas de normalización, se hubiera dado cumplimiento a las disposiciones de la ley 20.643 y sus normas reglamentarias y complementarias.

La condición dispuesta en el párrafo anterior no se exigirá cuando el sujeto obligado demuestre a la Dirección General Impositiva que las acciones fueron enajenadas con anterioridad al 1º de mayo de 1986.

Art. 14. — Los conceptos e importes consignados en los formularios de declaración jurada de normalización y determinación del impuesto especial quedarán sujetos a la verificación de la Dirección General Impositiva, la que podrá exigir en la oportunidad y forma que la misma disponga prueba fehaciente de la titularidad y existencia de los bienes, créditos y deudas declarados, como así también de la procedencia de los conceptos e importes que se reputen justificados de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º y 7º.

Asimismo, dicho organismo podrá verificar la realización de los bienes normalizados o, de corresponder,

la reinversión del importe de dicha realización, que hubieran tenido lugar con posterioridad a la fecha de cierre del último ejercicio comercial 1985 o, en su caso, al 31 de diciembre de 1985. A tal efecto los sujetos obligados deberán aportar los elementos de prueba que acrediten fehacientemente dicha situación.

Art. 15. — El abultamiento injustificado de la base imponible del impuesto especial de normalización, se presumirá, salvo prueba en contrario, defraudación fiscal y como tal sujeta a las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificatorias.

Art. 16. — Respecto de los sujetos que cumplan, en tiempo y forma, con las disposiciones de este capítulo, salvo los supuestos previstos en los puntos 1º y 2º del artículo 43, la Dirección General Impositiva no podrá verificar, fiscalizar ni determinar los tributos mencionados en el artículo 2º por los períodos fiscales comprendidos en la presente normalización, excepto cuando dicho organismo compruebe cualquiera de las siguientes situaciones:

- a) Que la base imponible del impuesto especial declarada es inferior en más de un quince por ciento (15 %) a la que debió declararse;
- b) Que la ganancia neta sujeta a impuesto declarada, en cualquiera de los cinco (5) períodos fiscales posteriores al último comprendido en la normalización, es inferior en más de un veinte por ciento (20 %) a la que debió declararse;
- c) Que el patrimonio neto sujeto a impuesto o, en su caso, el capital imponible, declarados en cualquiera de los cinco (5) períodos fiscales posteriores al último comprendido en la normalización, es inferior en más de un quince por ciento (15 %) a los que debieron declararse;
- d) Que por dos (2) o más períodos fiscales consecutivos no se presenten las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias, sobre los capitales o sobre el patrimonio neto, respecto de los sujetos que estén obligados a hacerlo.

Cuando se determinen diferencias en la base imponible del impuesto de este capítulo deberá ingresarse el impuesto especial, aplicando para su cálculo, sobre las aludidas diferencias, las alícuotas establecidas en el artículo 8º, incrementadas en un ciento por ciento (100 %), siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 9º, con más los intereses y actualizaciones que correspondan de acuerdo a las normas de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, sin perjuicio de las sanciones previstas en el mencionado texto legal.

Art. 17. — Los sujetos que normalicen en tiempo y forma su situación tributaria de acuerdo con el presente régimen, gozarán de los siguientes beneficios:

- a) No estarán obligados a los efectos exclusivamente tributarios, a declarar el origen o fuente de las ganancias o beneficios normalizados;
- b) Quedarán liberados de toda acción civil, comercial, penal, administrativa y profesional que pudiera corresponder por las transgresiones tributarias normalizadas y por aquellas que tuvieron

origen en las mismas. Quedan comprendidos en esta liberación los socios administradores y gerentes de sociedades de personas; directores, gerentes, síndicos y miembros de los consejos de vigilancia de sociedades de capital, y los profesionales certificantes de los correspondientes estados contables. Lo dispuesto en este inciso no alcanza a las acciones que pudieran ejercer los particulares perjudicados mediante dichas transgresiones;

- c) Para los contribuyentes o responsables no inscritos, producirá los efectos previstos en el inciso a) del artículo 59 de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones;
- d) Quedarán liberados del cumplimiento de las obligaciones emergentes del régimen establecido por la ley 23.256 y sus normas reglamentarias, por las ganancias, capitales o patrimonios normalizados o que se declaren por primera vez como consecuencia de la normalización.

El beneficio de la liberación prevista en el inciso b) precedente y en el artículo 18 no será de aplicación respecto de los sujetos que normalicen su situación tributaria cuando las ganancias o beneficios omitidos que se pretenden normalizar tuvieron origen en hechos delictivos declarados por sentencia firme.

Las sentencias firmes que, con tal contenido y alcance, se promuevan en el futuro producirán la pérdida de los beneficios que otorga esta ley, incluso el de liberación contemplado en el mencionado artículo 18.

Art. 18. — Cuando, en virtud de las causas indicadas en el artículo 16 renazcan las facultades de verificación y fiscalización de la Dirección General Impositiva y ésta determine diferencias de materia imponible en los impuestos y períodos fiscales comprendidos en el presente capítulo, los sujetos que hayan efectuado en tiempo y forma la normalización de su situación tributaria podrán liberarse, total o parcialmente, del pago de los impuestos que resulten de dichas diferencias.

La liberación prevista en el párrafo anterior sólo procederá:

- a) En los impuestos a las ganancias y sobre los beneficios eventuales, respecto del impuesto originado por incrementos de ganancias o beneficios netos, que resulten de:
 1. La incorporación de materia imponible no comprendida en las declaraciones juradas o determinaciones firmes a que se refiere el artículo 3º o respecto de la cual se hubiera tributado el impuesto a las ganancias con carácter definitivo o por vía de retención del impuesto sobre los beneficios eventuales correspondiente.
 2. Correcciones de errores en la interpretación o aplicación de las normas impositivas.
- b) En los impuestos sobre los capitales, sobre el patrimonio neto y de emergencia sobre los activos financieros, respecto del impuesto originado por incrementos del capital imponible del patrimonio neto sujeto a impuesto o del activo

financiero sujeto a impuesto, según corresponda, que reconozcan como causa:

1. La incorporación de materia imponible que no se origine en la capitalización de ganancias o beneficios comprendidos en las declaraciones juradas, determinaciones o retenciones a que alude el punto anterior.
2. Correcciones de errores en la interpretación o aplicación de las normas impositivas.

Esta liberación producirá efectos en todo los períodos fiscales comprendidos en la normalización que resulten afectados por la incorporación de la precitada materia imponible.

- c) En los impuestos de emergencia: respecto de la proporción del impuesto que corresponda al gravamen que constituya su base de cálculo y que se libere de acuerdo a lo dispuesto en este artículo;
- d) En los demás tributos enumerados en el artículo 2º: respecto de las diferencias de impuesto que reconozcan como causa la incorporación de materia imponible.

A los fines de la liberación de los impuestos a que aluden los incisos a) y b) precedentes, contra los incrementos de materia imponible mencionados en el primer párrafo se imputará el importe de la base imponible del impuesto especial, ambos expresados en moneda del mismo poder adquisitivo en la forma que determine la Dirección General Impositiva.

El impuesto liberado resultará de la diferencia entre el que corresponda a los incrementos de materia imponible determinada por la Dirección General Impositiva y el que se liquide sobre el monto que resulte de la imputación prevista en el párrafo anterior.

Art. 19. — Los sujetos obligados podrán efectuar la imputación a cualquiera de los períodos fiscales comprendidos en la normalización y dentro de ellos a las distintas ganancias o beneficios. Una vez efectuada dicha imputación, la misma tendrá carácter definitivo.

Los montos imputados respecto de alguno de los impuestos a las ganancias o sobre los beneficios eventuales no podrán ser imputados a la liberación del restante.

Los socios de sociedades aludidas en el tercer párrafo del artículo 1º podrán imputar, de acuerdo con las normas de este artículo, la proporción que les corresponda en la base imponible establecida por la sociedad de acuerdo con las disposiciones del artículo 4º, en tanto las diferencias de materia imponible determinada constituyan ganancias obtenidas a través de dichas sociedades. La imputación que efectúe el socio, conforme lo precedentemente establecido, no obsta la imputación que sobre dicha base imponible pueda efectuar la respectiva sociedad.

Art. 20. — Los incrementos patrimoniales y los bienes dispuestos o consumidos normalizados de acuerdo con el régimen de este capítulo, en ningún caso podrán ser considerados por la Dirección General Impositiva a los fines de la aplicación del artículo 25, inciso e), de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones.

Art. 21. — La normalización efectuada por los sujetos pasivos de retenciones liberará a los agentes de retención de su responsabilidad frente al fisco por la omisión de actuar como tales, siempre que las ganancias o beneficios sobre los que hubiera correspondido efectuar la retención estén comprendidos en la normalización mencionada.

Art. 22. — El importe de los quebrantos impositivos, incluido el originado en el ajuste por inflación, correspondiente a los períodos fiscales finalizados hasta el 31 de diciembre de 1985, no deberá computarse a los fines de la normalización dispuesta por este capítulo, deduciéndolos, de corresponder, en los períodos que cierren con posterioridad a la fecha indicada sólo en la parte que exceda el monto de la base imponible determinada a los fines de la normalización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4º.

Art. 23. — El impuesto especial establecido en el presente capítulo no será deducible a los efectos de la determinación de los impuestos a las ganancias y sobre los beneficios eventuales.

Art. 24. — Los bienes, créditos y deudas declarados o normalizados al cierre del último período fiscal comprendido en la normalización, conformarán el balance impositivo inicial del período fiscal siguiente para la determinación del impuesto a las ganancias, valuados de conformidad a las disposiciones que resulten aplicables a dicho impuesto.

Art. 25. — Las sociedades deberán informar a los socios o accionistas los incrementos patrimoniales y los bienes dispuestos que los mismos normalizan, a efectos de la respectiva justificación por parte de éstos.

En el supuesto de no producirse dicha información, los socios o accionistas, siempre que comuniquen por escrito esa circunstancia a la Dirección General Impositiva identificando a la sociedad respectiva, podrán optar por incluir en su normalización la omisión de la sociedad, en la proporción que les sea pertinente. La regularización así efectuada no producirá efectos respecto de la sociedad.

Art. 26. — Para las situaciones no previstas en este capítulo serán de aplicación en forma supletoria y en lo pertinente, las normas de la ley de impuesto a las ganancias, según texto vigente anterior a las modificaciones introducidas por la ley 23.260.

CAPÍTULO II

Régimen de normalización de los impuestos al valor agregado e internos

Art. 27. — Los responsables o contribuyentes de los impuestos al valor agregado e internos que hubieran omitido declarar montos de impuestos o hubieran declarado saldos a favor en exceso, en los períodos fiscales finalizados hasta el 31 de diciembre de 1985, inclusive, no prescritos a la fecha de publicación de esta ley en el Boletín Oficial, podrán normalizar su situación tributaria determinando e ingresando un impuesto especial de acuerdo con el régimen que se establece en el presente capítulo.

Art. 28. — Quedan excluidos de la presente normalización:

- a) Los impuestos previstos en los artículos 23 y 23 bis —incorporado por la ley 23.102— de la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1979 y sus modificaciones;
- b) Los montos no ingresados que se hubieran cobrado a responsables no inscritos por su condición de tales, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, según texto vigente anterior a la sustitución dispuesta por la ley 23.349;
- c) El monto del impuesto resultante de declaraciones juradas presentadas por los responsables o contribuyentes con anterioridad a la fecha de publicación de esta ley en el Boletín Oficial;
- d) El impuesto resultante de las determinaciones efectuadas por la Dirección General Impositiva que se encuentren firmes a la fecha indicada en el inciso anterior. No se considerarán comprendidas en este punto las intimaciones de pago realizadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones. A los fines previstos en este inciso, será de aplicación lo establecido por los párrafos segundo y tercero del punto 2 del inciso b) del artículo 3º del capítulo 1.

Art. 29. — Para la determinación del impuesto especial previsto en el artículo 27 deberán aplicarse las siguientes disposiciones:

- a) Impuesto al valor agregado: de acuerdo con las normas del impuesto al valor agregado vigentes para cada período fiscal, se establecerá:

1. El monto del impuesto que se hubiera omitido declarar.
2. La parte del saldo a favor del responsable declarado en exceso, excepto el correspondiente al período fiscal 1985 que se registrará por lo dispuesto en el artículo 30;

- b) Impuestos internos: conforme a las normas de impuestos internos vigentes para cada período fiscal, se establecerán los montos de los conceptos a que aluden los puntos 1 y 2 del inciso anterior. Los saldos a favor declarados para el último período fiscal comprendido en el año 1985 se registrarán por lo dispuesto en el artículo 30.

Los importes así establecidos para los períodos fiscales comprendidos en el año calendario 1985 se sumarán sin actualizar;

- c) Los montos que se obtengan de acuerdo con lo dispuesto en los incisos precedentes para cada período fiscal o año calendario, según se trate, se actualizarán conforme la variación operada en el índice de precios al por mayor, nivel general, suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, aplicando el coeficiente que surja de relacionar el índice del penúltimo mes anterior al del vencimiento que se fije para la presentación de la declaración jurada de normalización, con el índice del último mes del período fiscal o, en su caso, año calendario para determinar dichos montos;

- d) El importe actualizado que resulte para cada período fiscal o año calendario se reducirá en los porcentajes que para cada caso se fijan a continuación:

Impuesto al valor agregado

Período fiscal	Porcentaje de reducción %
1984 y anteriores	75
1985 Ejercicios cerrados hasta el mes de mayo, inclusive	75
1985 Ejercicios cerrados a partir del mes de junio, inclusive	25

Impuestos internos

Año calendario	Porcentaje de reducción %
1984 y anteriores	75
1985	25

- e) La suma de los importes que se determinen conforme al inciso anterior, constituirá el impuesto especial a ingresar.

Art. 30. — En los casos en que de la declaración jurada del impuesto al valor agregado presentada por el período fiscal 1985 surja un saldo a favor del responsable, la parte del mismo que se hubiera declarado en exceso se actualizará conforme la variación operada en el índice de precios al por mayor, nivel general, suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, aplicando el coeficiente que resulte de relacionar el índice del penúltimo mes anterior al del vencimiento que se fije para la presentación de la declaración jurada de normalización, con el índice del último mes del período fiscal 1985, y se adicionará a la suma a que se refiere el inciso e) del artículo anterior para establecer el impuesto especial.

Cuando se dé cumplimiento a lo previsto en el presente artículo, no deberán modificarse las imputaciones efectuadas del saldo a favor que surja de las aludidas declaraciones juradas, y el remanente del mismo no utilizado podrá imputarse contra las obligaciones del impuesto al valor agregado que se determinen con posterioridad a la fecha de vencimiento que se fije para la presentación de la declaración jurada de normalización.

Igual tratamiento se aplicará a los saldos a favor que surjan de las declaraciones juradas de impuestos internos presentada por el último período fiscal comprendido en el año 1985.

Art. 31. — Los responsables no inscritos en el impuesto al valor agregado que hubieran estado obligados a inscribirse en cualquiera de los períodos fiscales comprendidos en el régimen de este capítulo, cuando normalicen su situación tributaria podrán imputar contra los montos de impuesto que hubieran omitido de-

clarar, el importe del impuesto a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 20 de la ley de Impuesto al Valor Agregado, según texto vigente anterior a la sustitución establecida por la ley 23.349, que se les hubiera facturado en los mencionados períodos.

Art. 32. — Para que la normalización a que se refiere el presente capítulo tenga validez, deberán presentarse las declaraciones juradas y efectuarse el pago del impuesto especial en el tiempo y forma que establezca la Dirección General Impositiva, la que queda facultada para disponer planes de facilidades de pago y para establecer pagos a cuenta o anticipos del impuesto especial que en definitiva resulte. Una vez vencido el plazo que establezca dicho organismo para la presentación de las respectivas declaraciones juradas, éstas tendrán carácter definitivo y sólo podrán ser modificadas por errores de cálculo cometidos en los mismos formularios.

Art. 33. — Los sujetos que regularicen en tiempo y forma su situación tributaria de acuerdo con el presente régimen, gozarán de los beneficios establecidos en el artículo 17 del capítulo I.

Art. 34. — Cuando la Dirección General Impositiva determine diferencias en los impuestos y períodos fiscales comprendidos en el presente régimen, los contribuyentes y responsables que hayan efectuado, en tiempo y forma, la normalización de su situación tributaria podrán liberarse —total o parcialmente— del pago de dichas diferencias.

A los fines previstos en el párrafo anterior se considerará como impuesto liberado en cada período fiscal un importe equivalente al que se determinó por aplicación del punto 1 del inciso a) del artículo 29, para el respectivo período fiscal. En los impuestos internos el importe aludido que se hubiera determinado para un año calendario podrá imputarse a cualquiera de los períodos fiscales comprendidos en el mismo.

Cuando el mencionado organismo determine diferencias en los saldos a favor declarados en los períodos fiscales comprendidos en la normalización los responsables que hubieran efectuado, en tiempo y forma, la normalización de su situación tributaria, podrán imputar contra dichas diferencias los montos que hubieran determinado de conformidad con lo dispuesto en el punto 2 del inciso a) del artículo 29, en estos casos se considerará liberado un importe equivalente al de dichos montos.

Art. 35. — El impuesto especial establecido en el presente capítulo no será deducible a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias.

CAPÍTULO III

Régimen de condonación de sanciones y remisión de intereses

Art. 36. — Los contribuyentes o responsables de los tributos comprendidos en los capítulos I y II, excepto los mencionados en el inciso a) del artículo 28, podrán, de acuerdo con lo dispuesto por el presente capítulo, regularizar las obligaciones cuyos vencimientos se hubieran operado hasta el día 30 de junio de 1986, inclusive, en relación a los aludidos gravámenes que surjan de:

- a) Declaraciones juradas presentadas o determinaciones de oficio que hubieran quedado firmes hasta la fecha indicada;

- b) Anticipos, posiciones mensuales y pagos a cuenta;
- c) Retenciones o percepciones no practicadas;
- d) Multas firmes al 30 de junio de 1986, inclusive;
- e) Actualizaciones correspondientes al concepto mencionado en los incisos anteriores;
- f) Actualizaciones correspondientes al concepto mencionado en el inciso anterior.

El presente régimen comprende también a las obligaciones exteriorizadas o no, por actos o hechos imponibles formalizados hasta el día 30 de junio de 1986, inclusive, correspondientes al impuesto de sellos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Dirección General Impositiva, aun cuando no se requiera para su determinación la presentación de declaraciones juradas, incluidas las multas que hubieran quedado firmes a esa fecha.

Podrán ser incluidas en el presente régimen las obligaciones provenientes de regímenes de facilidades de pago, hubieran o no caducado los correspondientes beneficios.

Art. 37. — Condónanse los intereses resarcitorios, los punitivos y los establecidos por el artículo 150 de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, que no hayan sido ingresados, siempre que las obligaciones principales comprendidas en el presente régimen estuvieran pagadas al vencimiento del plazo que se fije para el acogimiento al mismo o se abonen conforme a sus disposiciones.

Bajo esas mismas condiciones condónanse igualmente las multas que no hubieran quedado firmes hasta el día 30 de junio de 1986, inclusive, y toda otra sanción o penalidad que correspondiera por hechos u omisiones vinculados con dichas sanciones.

Las sanciones previstas en el artículo incorporado a continuación del artículo 42 por la ley 23.314 y en el artículo 43 de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, en tanto no se hubieran cumplido y correspondan a hechos u omisiones incurridos hasta el día 30 de junio de 1986, inclusive, quedan definitivamente redimidas a partir de dicha fecha.

La condonación dispuesta por este artículo se producirá de oficio y aunque la regularización haya sido efectuada por terceros.

Art. 38. — La Dirección General Impositiva podrá acordar a los contribuyentes o responsables que se encuentren en la situación prevista en el artículo 36, facilidades de pago para el ingreso de las respectivas deudas, excepto para las obligaciones del impuesto de sellos cuya recaudación no se efectúe por declaración jurada que deberán ser abonadas al contado.

Asimismo, dicho organismo queda facultado en el caso de concursos preventivos cuya formación haya sido solicitada hasta la fecha de vencimiento que se fije para el acogimiento al presente régimen, siempre y cuando se provea favorablemente a su apertura, y con relación a las obligaciones contempladas en el artículo 36, con los beneficios establecidos por el artículo 37, a proceder del siguiente modo, con las condiciones, forma, plazos y garantías que fueran procedentes y estime necesarios;

- a) Respecto de los créditos con privilegio: a conceder un plazo excepcional de gracia de hasta dos (2) años, contados desde la fecha que se fije para el acogimiento al régimen previsto en este capítulo, a partir del cual el deudor deberá proceder al pago de la deuda al contado o mediante el plan de pagos que se determine de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo.

Durante dicho período de gracia se aplicarán la actualización e intereses reglados por la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones;

- b) Respecto de los créditos quirografarios: a votar favorablemente el acuerdo por el que se haya propuesto una espera. No está autorizada para aceptar quitas, remisiones o condiciones de pago que no sean, en dinero efectivo de curso legal o excedan las facilidades establecidas para el resto de los acreedores quirografarios, excepto que fueran inferiores a los beneficios derivados de este régimen, en cuyo caso éstos serán de aplicación.

En los supuestos de quiebra decretada, el fallido podrá acogerse al presente régimen, en cuyo caso el total o la primera cuota deberá abonarse al mes siguiente de la fecha del auto firme que tenga por levantada la quiebra. A este efecto la Dirección General Impositiva podrá prestar el consentimiento respectivo en los términos del artículo 225 de la ley 19.551, texto ordenado en 1984.

En los casos de quiebras en que se haya resuelto la continuidad, el síndico podrá efectuar el acogimiento y consecuentemente se procederá a la pertinente reliquidación del crédito fiscal. En los supuestos de acogimiento por obligaciones originadas en la explotación con posterioridad a la quiebra, será de aplicación el régimen general del presente capítulo.

Art. 39. — En los casos de responsables que se hallen sometidos a juicio de ejecución fiscal o cuando algunos de los conceptos comprendidos en el artículo 36 se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, el acogimiento al régimen del presente capítulo implicará el allanamiento y renuncia a toda acción y derecho, incluso el de repetición, relativo a la causa y el compromiso de asumir el pago de las costas y costos del juicio, en la forma y condiciones que disponga la Dirección General Impositiva.

Los honorarios que correspondan a los representantes del fisco se reducirán en un cincuenta por ciento (50 %), no pudiendo en ningún caso ser inferiores al arancel mínimo. El ingreso de dichos honorarios podrá ser efectuado mediante un plan de facilidades de pago en el tiempo, forma y condiciones que disponga la Dirección General Impositiva.

Art. 40. — La Dirección General Impositiva fijará el plazo a los fines del acogimiento al presente régimen.

CAPÍTULO IV

Disposiciones generales

Art. 41. — Los contribuyentes y responsables de los impuestos sobre los capitales y sobre el patrimonio

neto, que no se encuentren obligados a normalizar su situación impositiva conforme lo establecido en el capítulo I, podrán con relación a los mencionados tributos, regularizar las obligaciones correspondientes a los períodos fiscales comprendidos en dicho capítulo, presentando los formularios de declaración jurada o rectificando los ya presentados, en la forma, plazos y condiciones que determine la Dirección General Impositiva.

Sobre los saldos de impuesto que se determinen no procederá la aplicación de los intereses y sanciones previstos en la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones.

Art. 42. — Los contribuyentes y responsables podrán presentar las declaraciones juradas omitidas o, en su caso, rectificar las que hubieran presentado, por los impuestos indicados en los artículos 26 y 27 correspondientes a los períodos fiscales posteriores a los comprendidos en la normalización dispuesta por los capítulos I y II, a fin de quedar liberados en relación con las diferencias de impuestos no ingresadas de:

- a) Los intereses y multas que pudieran corresponder, cuando el vencimiento para la presentación de la respectiva declaración jurada hubiera operado hasta el 30 de junio de 1986, inclusive;

- b) Las multas que pudieran corresponder, cuando el vencimiento hubiera operado a partir del 1º de julio de 1986 y hasta la fecha de publicación de esta ley en el Boletín Oficial.

Esta liberación sólo alcanza a las presentaciones de declaraciones juradas originales o rectificativas, e ingresos que se efectúen hasta la fecha de vencimiento que a tales fines disponga la Dirección General Impositiva. A las precitadas declaraciones no les será de aplicación lo establecido en los incisos b) y c) del artículo 16.

Art. 43. — Quedan excluidos de los regímenes a que se refiere el título I de la presente ley, las empresas que gozaren o hubieren gozado de regímenes de promoción, no automáticos, sectoriales, regionales o especiales, aun en aquellos casos en que con anterioridad a la fecha de vencimiento del régimen de normalización, se hubiere producido la caducidad de la promoción acordada, así como también los inversionistas en dichas empresas.

Tal exclusión sólo procederá:

- 1º Respecto de las empresas: en relación a las obligaciones fiscales emergentes de actos, operaciones, capitales y ganancias provenientes de la actividad promovida, así como también de los diferimientos fiscales, desgravaciones, deducciones, franquicias y otros beneficios de similares características originados o vinculados con dicha actividad.

- 2º En lo referente a los inversionistas: respecto de las sumas invertidas en tales empresas o de los diferimientos fiscales, desgravaciones, deducciones, franquicias y otros beneficios de similares características, originados o vinculados con dichas inversiones.

Art. 44. — No corresponderá efectuar ajuste alguno a los importes de los anticipos de los impuestos a las ganancias, sobre los capitales y sobre el patrimonio neto, que hubieran sido determinados sobre la base de declaraciones presentadas con anterioridad a la fecha de vencimiento que se fije para la presentación de las declaraciones juradas de normalización, prevista en el capítulo I.

Art. 45. — El incremento del pasivo derivado de las normalizaciones previstas en los capítulos I y II de la presente ley, no será computable a fin de establecer la pérdida de capital a que se refiere el artículo 94, inciso 5º, de la ley 10.550, texto ordenado en 1984.

Art. 46. — El impuesto especial que se establece en los capítulos I y II, en todos los aspectos que no estén expresamente previstos en los mismos, se regirá por las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, y su aplicación, percepción y fiscalización estará a cargo de la Dirección General Impositiva.

Art. 47. — Respecto de los sujetos que normalicen su situación tributaria de acuerdo a las disposiciones de los capítulos I y II o de los artículos 41 y 42, no será de aplicación lo establecido en el artículo 18 de la ley 21.589.

Art. 48. — Quedan excluidos de la normalización los incrementos patrimoniales obtenidos por parte de los funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales a partir de la categoría de director nacional o equivalente hasta la de presidente de la República, inclusive, que se hubieran desempeñado a partir del 25 de marzo de 1976 y mientras se extienda la vigencia de la presente ley. Asimismo, quedan excluidos de igual forma quienes se hubiesen desempeñado como directores, administradores o en funciones equivalentes de las empresas del Estado.

Art. 49. — Suspéndese, con carácter general por el término de un (1) año, el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General Impositiva y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal de recursos judiciales.

Art. 50. — El producido del impuesto especial de normalización que se establece en los capítulos I y II se destinará:

- a) Un tres por ciento (3 %) a la Dirección General Impositiva para ser aplicados al desarrollo de su infraestructura y a la modernización de su capacidad operativa, por sobre los niveles que fije, con carácter general, el Poder Ejecutivo para la administración pública nacional en el ejercicio 1987;
- b) Un noventa y siete por ciento (97 %) será coparticipado en los niveles que fije el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, o en ausencia de éste en el marco de los acuerdos financieros transitorios que celebren el gobierno nacional y las provincias. Los importes correspondientes al gobierno nacional serán destinados

a la creación de un fondo para mejoramiento de la infraestructura social.

Art. 51. — Facúltase a la Dirección General Impositiva para dictar las normas complementarias que considere necesarias respecto de los regímenes establecidos en el presente título y en especial sobre plazos, imputación en casos de caducidad, condiciones, garantías, monto mínimo que podrá abonarse mediante los planes de facilidades de pago que establezca y monto mínimo por cada cuota y requisitos que deberán observarse en las informaciones a suministrar por los contribuyentes.

Art. 52. — El Poder Ejecutivo nacional solicitará la colaboración de los gobiernos de las provincias, del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y las demás municipalidades, a fin de que los mismos propicien ante las Legislaturas y concejos respectivo, leyes y ordenanzas que establezcan regímenes de análogas características a los previstos en esta ley, que posibiliten la normalización de las transacciones incurridas por los contribuyentes o responsables de los tributos vigentes o, en su caso, que hubieren estado vigentes en períodos no prescritos, en esas jurisdicciones.

TITULO II

Modificaciones a la ley 11.683

Art. 53. — Modifícase la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, en la forma que a continuación se indica:

1. Sustitúyese el artículo 3º por el siguiente:

Artículo 3º — La Dirección General Impositiva actuará como entidad autárquica en el orden administrativo en lo que se refiere a su organización y funcionamiento, según las normas que al efecto se prevén en la presente ley.

En lo que atañe a la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos a su cargo, se desenvolverá bajo la superintendencia general que ejercerá sobre ella la Secretaría de Hacienda.

A tales fines, su patrimonio estará constituido por todos los bienes que le asigne el Estado nacional y por aquellos que le sean transmitidos o adquiera por cualquier causa jurídica. Continuará la gestión del actual organismo, quedándole afectados íntegramente los bienes propios o los cedidos en uso, créditos, derechos y obligaciones. El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para transferir sin cargo los inmuebles actualmente en uso por la Dirección General Impositiva y que son de propiedad del Estado nacional.

La fiscalización de la Dirección General Impositiva por parte del Tribunal de Cuentas, se realizará con posterioridad a los actos respectivos, mediante estados mensuales y su documentación probatoria, correspondientes a la ejecución de su presupuesto administrativo, sin perjuicio de las facultades que le otorga la Ley de Contabilidad a la Contaduría General de la Nación.

2. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 5º, por el siguiente:

Secundará al director general en sus funciones el número de subdirectores generales que, hasta un máximo de cuatro (4), determine la Secretaría de Hacienda.

3. Incorpórase a continuación del artículo 5º, el siguiente:

Artículo — El director general y los subdirectores generales serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de la Secretaría de Hacienda.

Dichos funcionarios no podrán ejercer otro cargo público con excepción de la docencia y regirán para los mismos las incompatibilidades establecidas para el personal del organismo.

No podrán desempeñar dichas funciones:

- Los inhabilitados para ejercer cargos públicos, hasta diez (10) años después de cumplida la condena;
- Quiénes no puedan ejercer el comercio;
- Los fallidos por quiebras culpables o fraudulentas, hasta diez (10) años después de su rehabilitación;
- Los fallidos por quiebras casual y los concursados, hasta cinco (5) años después de su rehabilitación;
- Los directores o administradores de sociedades cuya conducta hubiese sido calificada de culpable o fraudulenta, hasta diez (10) años después de su rehabilitación.

4. Sustitúyese el artículo 6º por el siguiente:

Artículo 6º — El director general tendrá las atribuciones y responsabilidades que se detallan seguidamente:

- Representar legalmente a la dirección general, personalmente o por delegación o mandato, en todos los actos y contratos que se refieran para el funcionamiento del servicio, de acuerdo a las disposiciones en vigor y suscribir los documentos públicos o privados que sean necesarios;
- Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la dirección general en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal, incluyendo el dictado y/o modificación de la estructura orgánico-funcional y el estatuto del personal;
- Proponer al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Hacienda, el escalafón del personal y su reglamento, incluido el régimen disciplinario, pudiendo dictar las disposiciones reglamentarias pertinentes;
- Designar personal con destino a la planta permanente y/o temporaria así como también promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones disciplinarias, con arreglo al régimen legal vigente. Designar directamente al personal que resulte necesario para poner en funcionamiento las unidades de estructura

del máximo nivel de conducción, que reporten directamente al director general y correspondan a la primera categoría en el orden jerárquico del respectivo escalafón, como asimismo proceder a su reemplazo, sin sujeción al régimen concursal o al de la selección vigente;

- Aplicar sanciones disciplinarias a su personal, de conformidad con las normas legales y reglamentarias, y determinar los funcionarios con facultades para hacerlo;
- Efectuar contrataciones de personal para la realización de labores estacionales, extraordinarias o especiales que no puedan ser realizadas por sus recursos de planta permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución;
- Suscribir en representación del Poder Ejecutivo nacional y bajo la autorización previa de la Secretaría de Hacienda, convenciones colectivas de trabajo con la entidad gremial que represente al personal;
- Elevar anualmente a la Secretaría de Hacienda el plan de acción y el anteproyecto de presupuesto de gastos e inversiones para el ejercicio siguiente;
- Administrar el presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones del organismo, pudiendo redistribuir los créditos a nivel de incisos, partida principal, parcial y proyectos del plan analítico de trabajos públicos, sin alterar el monto total asignado;
- Licitat, adjudicar y contratar obras públicas y suministros, adquirir, vender, permutar, transferir, locar y disponer de toda forma respecto de bienes muebles e inmuebles para el uso de sus oficinas o del personal, conforme las necesidades del servicio, aceptar donaciones, con o sin cargo, todo conforme a lo dispuesto por la Ley de Contabilidad;
- Toda otra atribución compatible con el cargo y necesaria para el cumplimiento de las funciones del organismo.

5. Incorpórase entre los párrafos segundo y tercero del artículo 24, el siguiente:

La determinación deberá contener lo adeudado en concepto de tributos y, en su caso, multa, con el interés resarcitorio y la actualización, cuando correspondiesen, calculados hasta la fecha que se indique en la misma, sin perjuicio de la prosecución del curso de los mismos, con arreglo a las normas legales y reglamentarias pertinentes.

6. Sustitúyese el artículo 102, por el siguiente:

Artículo 102. — Las personas físicas y jurídicas y las sucesiones indivisas deberán declarar a la Dirección General Impositiva los bienes muebles e inmuebles registrables, de los cuales sean titulares de dominio.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los organismos que tengan a su cargo el regis-

tro de la propiedad de bienes muebles e inmuebles, no inscribirán las transferencias de dominio de los mismos ni la constitución de derechos reales sobre dichos bienes o sus cancelaciones o modificaciones totales o parciales, cuando en las respectivas escrituras o instrumentos no constara la presentación de un certificado otorgado por la Dirección General Impositiva que acredite que los referidos bienes han sido debidamente declarados ante la misma por el transferente.

Igual recaudo deberá observarse cuando la inscripción se realice por orden judicial.

La Dirección General Impositiva reglamentará la forma, plazo, requisitos y demás condiciones relativas al cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y fijará las excepciones que corresponda introducir para no obstruir las operaciones aludidas o en atención a las particularidades que el caso ofrezca.

7. Sustitúyese el artículo 114, por el siguiente:

Artículo 114. — Los recursos de la Dirección General Impositiva provendrán:

- Los importes que anualmente le asigne la ley de presupuesto de la administración nacional;
- Las sumas provenientes de las prestaciones a terceros y venta de publicaciones, formularios e instrucciones, que realice el organismo;
- Los importes que provengan de la venta de bienes muebles o inmuebles registrables o no. Dichos importes podrán ser aplicados exclusivamente a la compra o construcción de otros bienes de tal naturaleza, en forma indistinta;
- Todo otro ingreso no contemplado expresamente, pero cuya percepción no sea incompatible con las facultades otorgadas al organismo.

La Dirección General Impositiva tendrá a su cargo la administración y manejo de los fondos destinados a atender su presupuesto, quedando facultada para deducir el importe de los mismos del monto de las recaudaciones a su cargo.

A tal efecto, cumplidas las disposiciones legales y reglamentarias hasta la emisión de los respectivos libramientos de entrega o pago, hasta su trámite en la Tesorería General de la Nación, practicará con conocimiento de ésta, las operaciones de compensación que fueren necesarias afectando dichos libramientos.

TITULO III

Modificaciones a la Ley de Impuesto de Sellos

Art. 54. — Modifícase la Ley de Impuesto de Sellos, texto ordenado en 1986, en la forma que se indica a continuación:

1. Sustitúyese el inciso b) del artículo 29, por el siguiente:

- De acuerdo con las normas del título III, las operaciones monetarias registradas contable-

mente por las entidades regidas por la ley 21.526 y sus modificaciones, con asiento en la Capital Federal, aunque se trate de sucursales o agencias de una entidad con domicilio fuera de ella.

Se incluyen también las operaciones financieras en que no intervengan entidades regidas por la ley 21.526 y sus modificaciones, siempre que una cualquiera de las partes se encuentre domiciliada o radicada en la Capital Federal, aunque la registración contable se realice fuera de su jurisdicción.

2. Sustitúyese el artículo 23, por el siguiente:

Artículo 23. — Estarán sujetos al impuesto proporcional del veinticinco por mil (25 %), sobre los montos imponibles respectivos, los actos que se mencionan a continuación:

- Constitución de derechos reales sobre inmuebles y sus prórrogas;
- Emisión de debentures con garantía hipotecaria;
- Los casos mencionados en el artículo 2.696 del Código Civil;
- Los títulos informativos de propiedad.

Para las escrituras públicas de compraventa de inmuebles o de cualquier otro contrato por el cual se transfiere el dominio de inmuebles, se pagará el impuesto de acuerdo con la siguiente escala:

Base imponible valor al 30 de septiembre de 1986

Más de \$	Hasta \$	Alícuota %
0	10.000	7,5
10.000	12.500	10,0
12.500	15.000	12,5
15.000	17.500	15,0
17.500	20.000	20,0
20.000	—	25,0

Quedan incluidas en la misma las transferencias de dominio de inmuebles que se realicen con motivo de:

- Aporte de capital a sociedades;
- Transferencias de establecimientos comerciales o industriales;
- Disolución de sociedades y adjudicación a los socios.

Las escrituras públicas de compraventa de inmuebles con características de vivienda común o económica, destinadas a vivienda familiar permanente de interés social, abonarán el impuesto con una rebaja del cincuenta por ciento (50 %). Para la calificación de la vivienda de interés social no suntuosa —común o económica—, deberá atenderse a las disposiciones de la resolución 368/76 del 13 de octubre de 1976, de la entonces Secretaría de Estado de Vivienda y Urbanismo.

3. Incorpórase a continuación del artículo 60 el siguiente:

Artículo ... — Están alcanzadas asimismo por un impuesto proporcional del sesenta por mil (60%) por año todas las operaciones consignadas en el segundo párrafo del artículo 29 que representen entregas o recepciones de dinero y en virtud de las cuales se genere un crédito por intereses, actualizaciones monetarias o aumento de valor de bienes en especie.

Serán responsables del ingreso del tributo el tomador y/o prestamista con domicilio en Capital Federal aunque la registración contable se efectúe fuera de esta jurisdicción.

El tributo se calculará sobre el monto dinerario o valor de las especies a la fecha de cancelación de la operación.

De existir cancelaciones parciales se liquidará el impuesto en forma definitiva sobre cada una de ellas, aplicando la tasa en función del tiempo transcurrido. En caso que el plazo de las operaciones exceda de un trimestre calendario deberá efectuarse la liquidación del tributo en la forma y condiciones que establezca la Dirección General Impositiva, pudiendo resolver que se efectúen liquidaciones parciales o totales del mismo.

4. Incorpórase como artículo siguiente del incorporado a continuación del artículo 60 el siguiente:

Artículo ... — Si existieran diferencias entre las registraciones contables de las partes y las de la entidad financiera interviniente, se aplicará el tributo sobre la que sea mayor.

En tal caso el tributo liquidado e ingresado por la entidad financiera se considerará pago a cuenta de la obligación total.

5. Sustitúyese el artículo 61 por el siguiente:

Artículo 61. — El impuesto del artículo 60 se pagará sobre la base de los numerales establecidos para la liquidación de los intereses, en proporción al tiempo de utilización de los fondos.

En los casos de cuentas con saldos alternativamente deudores y acreedores, el gravamen deberá liquidarse en forma independiente sobre los numerales respectivos.

El impuesto de este título será exigible a partir del momento en que los intereses, actualizaciones o valorización de las especies se debiten, acrediten o abonen, y deberá efectuarse la liquidación del tributo en la forma y condiciones que la Dirección General Impositiva establezca.

6. Sustitúyese el artículo 62 por el siguiente:

Artículo 62. — Están exentos del impuesto establecido en este título:

- Los depósitos en caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro y los depósitos a plazo fijo;
- Los créditos concedidos para financiar operaciones de importación y exportación y los otorgados con motivo de operaciones de cambio sujetas al impuesto sobre las ventas, compras o permutas de divisas;

- Los adelantos entre entidades regidas por la ley 21.526 y sus modificaciones;
- Los créditos en moneda argentina concedidos por los bancos a corresponsales del exterior;
- Los préstamos documentados en letras de cambio, vales, pagarés, contratos de mutuo, reconocimiento de deuda u obligaciones de dar sumas de dinero, aunque tales actos se otorguen en distinta jurisdicción;
- Las sumas que las empresas debiten o acrediten a sus empleados en concepto de depósitos o préstamos, por los saldos individuales que no superen la suma de quinientos australes (\$ 500);

Las exenciones a que se refieren los incisos a), b), d) y e) tendrán efectos sólo cuando las operaciones sean efectuadas por entidades sujetas al régimen de la ley 21.526 y sus modificaciones.

7. Sustitúyese el artículo 63 por el siguiente:

Artículo 63. — Estarán exentas del impuesto de sellos las escrituras hipotecarias y demás garantías otorgadas en seguridad de las operaciones sujetas al gravamen de este título, efectuadas por las entidades sujetas al régimen de la ley 21.526 y sus modificaciones, aun cuando estas garantías sean extensivas a las futuras renovaciones de dichas operaciones.

Cuando las entregas o recepciones de dinero que devenguen intereses queden garantizadas mediante vales, pagarés, letras de cambio, contratos de mutuo, reconocimiento de deuda, obligaciones de dar sumas de dinero y órdenes de pago, o la firma de fórmulas en blanco de dichos documentos, se deberá abonar por los mismos el impuesto correspondiente, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de las normas establecidas por el inciso f) del artículo 58.

8. Incorpórase a continuación del artículo 63 el siguiente:

Artículo ... — Sin perjuicio de la responsabilidad fijada para los contratantes por la presente ley, la parte a cuyo cargo se encuentre el pago de los intereses deberá ingresar el gravamen establecido por este título, salvo que la operación se hallare sujeta a la imposición o fuera objeto de una exención objetiva del impuesto de sellos en el lugar de su domicilio o asiento.

La prueba sobre la imposición o exención precedentemente referidas quedará a cargo de la parte con domicilio o asiento en la Capital Federal, bajo apercibimiento de quedar obligada solidariamente al ingreso total del tributo.

En todos los casos, cuando la operación haya sido concertada por entidades regidas por la ley 21.526 y sus modificaciones, el impuesto estará a cargo íntegramente de quien contrate con tales instituciones, debiéndose realizar el ingreso con intervención y bajo responsabilidad personal y solidaria de estas últimas.

TITULO IV

Régimen de empadronamiento general

Art. 55. — Los contribuyentes y/o responsables que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes tengan la obligación de estar inscritos en los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Dirección General Impositiva, deberán empadronarse en la forma, plazos y demás condiciones que la misma establezca.

A dicho fin facúltase al citado organismo para otorgar un número único válido para todos o algunos de los tributos a que alude el párrafo anterior.

Los sujetos inscritos a las fechas de vencimiento que se fijen para el empadronamiento y que no cumplieren en tiempo y forma esta obligación, perderán su carácter de inscritos en los respectivos tributos, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder de conformidad a las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones.

TITULO V

Vigencia

Art. 56. — La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, excepto para:

1. Las sustituciones de los artículos 3º, 5º, 6º y 114 de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, dispuesta por los puntos 1, 2, 4 y 7 del artículo 53, que serán aplicables a partir del ejercicio presupuestario 1987.
2. La sustitución del artículo 102 de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, dispuesta por el punto 6 del artículo 53, que entrará en vigor a partir del 1º de enero de 1988, inclusive.

Art. 57. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

JUAN C. PUGLIESE.
Hugo Belnicoff.

Sr. Presidente. — En consideración en general. Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Señor presidente, quiero decir en primer lugar que este proyecto de ley en revisión tomó estado parlamentario en el Senado en la sesión de ayer, hace escasas veinticuatro horas.

Aclaro que el tema no es nuevo para este cuerpo, y mucho menos para la comisión que ha trabajado en este asunto; todos los representantes de los distintos partidos políticos integrantes de ella y otros senadores interesados en el tema se han preocupado de seguir el trámite de aproximadamente dos meses que la iniciativa mereció por parte de la Cámara de Diputados.

En consecuencia, al llegar aquí este cuerpo legal, teníamos idea clara no solamente del mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, sino también de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, para recoger inquietudes de las variadas bancadas que la componen. Ello ha permitido formar criterio propio sobre algunos detalles; aceptaremos así algunas modificaciones introducidas en la otra Cámara y provocaremos ciertos cambios que estimamos convenientes, sobre cuyos aspectos hemos conversado en detalle con todos los señores senadores.

Frente a esta iniciativa se han debido coordinar sus efectos en distintas leyes de impuestos a los capitales, al patrimonio neto, a las ganancias, al valor agregado, de sellos, previendo extensamente las implicaciones a través de los años de vigencia de las mismas. Ello exigía una comparación razonable entre las disposiciones anteriores y las que modificamos, con el objeto de obtener un texto ordenado con cláusulas coherentes y concordantes, las unas con las otras. A tal efecto recurrimos a los técnicos de la comisión y a los de la Secretaría de Hacienda y de la Dirección General Impositiva por el temor de que algunas de las modificaciones que pretendíamos alterar de alguna manera disposiciones anteriores, que no estaba en nuestro ánimo modificar.

Las leyes impositivas tienen un intrincado razonamiento técnico. Puede tenerse la voluntad de hacerlas más sencillas, pero se complican a veces por querer cerrar un determinado ordenamiento y en el afán de lograr con cuidado que todos se consideren igualmente y sean tratados por igual frente a las disposiciones legales.

En nuestro país, como consecuencia de distintas circunstancias históricas y políticas, y en razón de ciertos aspectos de proyección económica, hubo necesidad de dictar diferentes leyes de regularización impositiva. Como dijimos ayer ante una pregunta del senador Vidal, comúnmente se llaman leyes de "blanqueo". Ellas comenzaron en el año 1956; la segunda fue en 1962; se repitieron en el 69 y en el 70, en el 73, en el 77 y en el 82. Tengo los números de las leyes, pero creo que basta con la ubicación política de los tiempos en que se sancionaron. Hubo otro caso más en los primeros meses del 83, en el último tramo de la administración del "proceso". Y desde luego estamos ahora inmersos en el análisis de una iniciativa que puede concretarse tras el debate de esta tarde del Senado y uno posterior de la Cámara de Diputados.

En razón de algunas posiciones teóricas, doctrinarias y aun filosóficas alrededor de este me-

canismo de "blanqueo", debo decir que es la primera oportunidad en que un gobierno radical —ni siquiera los apoyó siendo oposición— se introduce en este ámbito legislativo de las normalizaciones o "blanqueos".

Entendemos, señor presidente, que a esta altura del proceso económico del país asistimos a un reordenamiento tras el enorme descalabro producido con anterioridad, en un período desgraciadamente largo y profundo, en que hubo extraordinarias transformaciones negativas para la vida política y económica de la República.

Debemos enfrentar las situaciones y trabajar para la estabilización, haciendo un manejo de nuestra historia para salir adelante, a través de un ordenamiento tanto político como económico que impida deterioros y tergiversaciones de la legislación.

El Congreso de la Nación, y particularmente este Senado, ha trabajado para ir transformando, a través de las leyes que ha dictado, el manejo impositivo del país, contribuyendo a su clarificación. Hemos sancionado catorce leyes en estos tres años de labor, las que han ido modificando la estructura impositiva y rentística de la República. Asimismo, nuestra legislación incursionó en terrenos o áreas que antes estaban vedados; por ejemplo, pudimos definir nuestra posición y eliminar los secretos bancario y bursátil pues ahora, mediante las nuevas disposiciones de la legislación, la Dirección General Impositiva —que es el instrumento administrativo y técnico dentro del ordenamiento tributario— puede obtener las informaciones que estime correspondan para analizar y controlar las declaraciones juradas de cada uno de los contribuyentes.

Por eso estimamos que este "blanqueo" o regulación es importante. Ni nosotros ni el gobierno pretendemos perseguir a nadie; simplemente se trata de colocarnos en una mejor situación para ir hacia adelante donde sí se respeta absolutamente la legislación que se vaya estableciendo, a través de las normas que conforman la estructura legal de la Argentina.

Por eso, nos parece oportuno hacer un alto en el camino y decir a los conciudadanos que todos debemos ponernos en orden, organizando nuestras respectivas presentaciones ante la administración pública, de modo que en lo sucesivo podamos responder con exactitud a las nuevas disposiciones legales e impositivas que van conformando el conjunto de la legislación que debemos respetar. Las leyes que tenemos en estudio más los nuevos proyectos que se agreguen para satisfacer nuevas necesidades jurídicas irán enriqueciendo todo ese caudal legislativo.

El mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña al proyecto de ley que estamos analizando, además de plantear la regularización impositiva, introduce disposiciones complementarias vinculadas con la formación y administración de la Dirección General Impositiva, con el objeto de darle mayor libertad de acción; por ese motivo, incorpora la figura del manejo autárquico de la Dirección General y establece otras normas referidas a su organización interna.

En cuanto a los aspectos fundamentales de la citada regularización, se indica el procedimiento a seguir para los impuestos a las ganancias, a los patrimonios y a los capitales, en caso de que existan diferencias al 31 de diciembre de 1985 entre las cifras hasta ese momento declaradas y no declaradas con las cifras de la realidad; se determina a su vez la escala de valores que se debe aplicar para la regularización.

También se incluye en la norma el impuesto al valor agregado y el de sellos, de modo de realizar un equilibrio con la última modificación del IVA, aprobada en este recinto hace aproximadamente un mes atrás.

En materia del impuesto de sellos, se establecen algunas disposiciones particulares para el caso de los pequeños contribuyentes, a los efectos de favorecer la compraventa de inmuebles de pequeño monto con escalas menores, y algunas otras modificaciones.

Agregamos entonces un capítulo más, referido a la posibilidad de implementar el desarrollo productivo de la República, favoreciendo la incorporación de capital efectivo, tanto en moneda extranjera como nacional, con una disminución en la escala prevista en la propia ley para los demás casos, siempre que se destine a ciertos renglones específicos de la producción y del consumo.

La Cámara de Diputados introdujo algunas modificaciones de tipo técnico. Otras son de carácter conceptual, como la creación del fondo para el mejoramiento de la infraestructura social. También incluyó la coparticipación entre la Nación y las provincias, como consecuencia de una iniciativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Honorable Senado expresada por nuestros técnicos en mi presencia en algunas reuniones conjuntas efectuadas para coordinar la acción de ambas Cámaras y obtener una mayor rapidez en el tratamiento de este asunto, que por su propio dinamismo exige una consideración ágil para que sus disposiciones entren a funcionar cuanto antes. En efecto, si el trámite parlamentario se prolongara demasiado, los contribuyentes verían la posibilidad de acomodar las cifras para mejorar su situación ante la ley.

Con respecto a la coparticipación entre las provincias y la Nación, hemos introducido algunas reformas que van más allá de la iniciativa de la Cámara de Diputados, para hacerla más fluida, más técnicamente conceptuada y más rápidamente inteligible, al mismo tiempo que definitoria en cuanto a los porcentajes que tocan a las partes. Por sugerencia de algunos señores senadores integrantes de la comisión hemos incluido también la automaticidad en la distribución entre las provincias a medida que se va recaudando el impuesto, con lo cual se logra una relación dinámica entre ingreso y distribución para aliviar las finanzas provinciales.

A nuestro criterio se mejora la llamada progresividad, es decir la escala de tasas y valores, en el cálculo del impuesto, con respecto al proyecto original del Poder Ejecutivo aprobado por la Cámara de Diputados. En esa forma se favorece en primer lugar el ensanchamiento del número de contribuyentes que se han de presentar. Nosotros interpretamos que hay un importante número de ciudadanos que por alguna razón no han declarado pequeños montos de capital, y nosotros así les facilitaríamos la posibilidad de abonar una pequeña suma en concepto de regularización, con lo cual quedan de hecho incorporados como contribuyentes y, en consecuencia, definidos para el futuro en las planillas de observación y control de la Dirección General Impositiva.

También hemos tenido la idea de que el "blanqueo" no sea exclusivamente una contribución para salvar problemas fiscales transitorios. Esto es cierto por un lado, porque todos conocemos las angustias del Tesoro nacional. No hay en esto ninguna novedad, de tal modo que la incorporación de un importante número de contribuyentes permitirá una razonable recaudación impositiva, elevando las finanzas públicas; al mismo tiempo se cerrará la caja del año 86 como consecuencia de las exigibilidades fatalmente nuevas —no consideradas a principio de año—, tanto en el orden nacional como en el provincial y municipal. Aquí, por cierto, podemos hablar de un *slogan* permanente e histórico que dice que el dinero nunca alcanza para la administración pública; y esto no sólo rige para nuestro país sino para todo el mundo.

También, en lo referido a mejoras introducidas en esta Cámara, debo mencionar unas cuantas disposiciones de orden estrictamente técnico, expresadas en las modificaciones contenidas en el dictamen que hemos firmado, tanto los senadores de la bancada radical como los de las distintas bancadas justicialistas que trabajan en la Comisión, y cuyo detalle, entiendo, debemos superar como consecuencia de lo intrincado de

las explicaciones y de las interpretaciones pertinentes.

También quiero decir que hemos mejorado la escala de pagos del impuesto de sellos. Hemos excluido el pago de sellos en todo aquello que afecte directamente a las compras de uso común, como las que tienen que ver, por ejemplo, con las cooperativas de ahorro y préstamo de círculo cerrado para la adquisición de bienes de uso totalmente familiares. En definitiva, cualquier tipo de impuesto que se incluyera sería abonado por el comprador. Por supuesto, se trata siempre de artículos de uso necesario y familiar.

Pero, fundamentalmente, quiero particularizar sobre el agregado al capítulo V, por el cual procuramos mejorar la reactivación económica y las posibilidades de inversión. En realidad, siempre hablamos de la necesidad de mejorar la inversión y nos pareció prudente establecer algún delincamiento a través de un impuesto que no fuera estrictamente fiscal sino que, además, tuviera visos de contribuir al desarrollo económico de la República.

Para ello tuvimos en cuenta una iniciativa propuesta desde hace tiempo por el señor senador Gómez Centurión relativa a fondos depositados en el exterior, para que ingresaran en nuestro país, a través de algún mecanismo que permitiera su incorporación en áreas correspondientes a actividades de suma importancia para el desarrollo nacional.

Si bien es cierto que aquel proyecto tenía un sentido mucho más amplio, hemos tomado algunas de sus ideas, incorporándolas en este marco legal que otorga cierta confluencia entre "blanqueo" e incorporación de capitales, haciendo esto extensivo también a capitales no declarados en el país; ello, con el objeto de otorgar un equilibrio en el tratamiento referido a los capitales del exterior, tema sobre el cual no quiero entrar en detalles ya que son conflictivos para todos, inclusive yo, en cuanto a su interpretación y entendimiento, respecto de aquellos otros que están en el país y que funcionan en la llamada economía subterránea, comúnmente denominada economía negra.

Los capitales en efectivo seguramente aparecerán en las áreas especulativas, y al respecto pretendemos brindar una luz verde o un llamado de atención para la regularización de la situación impositiva, propendiendo a la incorporación en la producción de bienes y servicios.

Estimamos que si la incorporación se produce en aras de la construcción de edificios, de la adquisición de viviendas nuevas, de la aplicación de fondos al Banco Hipotecario Nacional para la construcción de viviendas es porque indicamos que esos capitales son para la compra de

bienes de uso, tanto en el orden interno nacional como en el externo, en la medida en que por otras disposiciones esté permitido, a fin de aumentar la capacidad productiva de las industrias. También están dirigidos a la suscripción de acciones de sociedades anónimas que cotizan en bolsa, siempre y cuando esos fondos sean destinados también al incremento productivo de las propias empresas dentro de los niveles y orientaciones de la ley y de las disposiciones que se establecen en el proyecto que estamos considerando.

Quedaría regularizado así un cuerpo legal que, además de una mira de tipo, fiscal y de regularización hacia adelante, tiene el sentido de ampliar el número de contribuyentes en forma voluntaria. De esta manera, la Dirección General Impositiva puede tener una base cierta, firme y definitiva, sin entrar en los procedimientos especulativos anteriores que, por un lado, requerían una enorme cantidad de personal, con el que no cuenta esta Dirección y, por otro se generaba un complejo de situaciones conflictivas, en las que no queremos entrar. Y esto, precisamente, por lo que decimos acerca de que toda nuestra ciudadanía productiva se dedique exclusivamente a la producción y no a litigar.

Entendemos, señor presidente, que esta ley es oportuna, fue elaborada conforme a los mejores cánones —me refiero a la declaración impositiva de los bienes— y además no tergiversa disposiciones, ni lesiona la moral ni la ética ni va contra ninguna norma legal. Asimismo, la llamamos, digamos así, de modo que contribuya también —como deben hacerlo todas las leyes impositivas— al desarrollo de la economía nacional.

Por todo lo que acabo de expresar solicito la aprobación de este proyecto. Cuando sea considerado en particular propondremos algunas modificaciones que olvidamos incluir en el dictamen, pero que fueron consideradas en el seno de la comisión y de las cuales están enterados todos los señores senadores que intervinieron en el estudio del proyecto.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Murguía. — Señor presidente: tenemos que tratar un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, en el cual se establece que se tenderá un manto de olvido que beneficiará a quienes hayan sacado capitales del circuito legal, ya sea que estén en el país o en el extranjero.

Una medida como la que analizamos no tendría razón de ser si el país no estuviera urgentemente necesitado de capitales que lo saquen de su estancamiento. Tampoco tendría razón de ser

si una monstruosa deuda externa, ilegítima e imposible de pagar no estuviera succionando nuestros escasos recursos e impidiendo nuestra capitalización. Asimismo, no sería necesaria si el funcionamiento global de la economía no fomentara de diversas maneras la posibilidad de que los capitales sean quitados del circuito legal.

Quiero señalar mi profunda convicción de que una política económica como la que en este momento se instrumenta que, favorece la especulación financiera por sobre la producción, no tiene más remedio que generar como secuela inevitable la que nuevos capitales sigan saliendo continuamente del control fiscal para buscar horizontes más rentables en el circuito financiero paralelo, donde las tasas de interés rinden más que la inversión productiva.

Es decir, señor presidente, que no se me escapa que estamos dando una solución transitoria y de emergencia al problema de la falta de recursos que padecen la Nación y las provincias, pero no estamos evitando que el mal de la evasión se siga produciendo. Y no podemos evitarlo desde este recinto porque el manejo de la política económica no está en manos del Poder Legislativo. Pero tampoco debemos dejar de actuar sobre el profundo estado de necesidad del país, con las herramientas en nuestras manos.

También debemos señalar otro punto que es una verdad de Perogrullo. Es necesario blanquear, porque hay en el país una economía negra de gigantescas proporciones, a la que desde estas bancas ya hemos denunciado.

En síntesis, estaríamos sancionando una ley de blanqueo, entre otras razones, porque no hay un proyecto global de crecimiento audaz y sostenido de la economía; no existe tampoco un proyecto de redistribución progresiva del ingreso que favorezca al sector asalariado e industrial, y por lo contrario, se beneficia a los grandes acreedores externos, a quienes cada vez resulta más difícil pagarles, y al sistema financiero interno, que no cumple con una función de promoción del crecimiento del país, sino únicamente de su propio crecimiento.

Señor presidente: estamos blanqueando mientras se nos indica que los trabajadores del Estado quedarán imposibilitados de hacer huelgas para defender sus salarios, con los que solamente pueden, en este momento, llegar al día diez de cada mes.

Hay acá una contradicción evidente. Estamos favoreciendo a quienes ennegrecieron la economía del país, para que esos capitales quitados al esfuerzo colectivo puedan volver a producir legalmente. Pero les estamos quitando a las primeras víctimas de estas y otras maniobras

peores la posibilidad de reclamar mejores condiciones de vida.

El Estado se niega a pagar mayores salarios porque debe afrontar obligaciones derivadas de una deuda externa que no terminó de ser investigada, y en nombre de un Plan Austral que contuvo la inflación durante un año, pero que no terminó siendo un plan de crecimiento y de justicia social.

Sin embargo, señor presidente, hechas estas consideraciones que no puedo ocultar, quiero adelantar mi voto favorable a esta ley, basándome en lo que expuse al iniciar mi exposición.

Estamos en estado de emergencia económica; la Nación y las provincias necesitan los recursos que provendrían del blanqueo y necesitan incorporar los capitales blanqueados al circuito productivo.

Quiero hacer, además, señor presidente, algunas consideraciones específicas respecto de las modificaciones que la comisión que integro —Presupuesto y Hacienda— efectuó al proyecto que este cuerpo recibió en revisión de Diputados.

En primer lugar, una observación metodológica. No estamos de acuerdo con que se haya introducido en este proyecto un tema que le es ajeno, como el de dotar de mayor autonomía a la Dirección General Impositiva.

Sin embargo, consideramos que la medida es en sí misma correcta, y es por ello que la aprobamos también, hecha la reserva del método.

La Dirección General Impositiva es solamente un instrumento de recaudación. Las causas que llevan a quitar capitales del circuito legal son ajenas a los sistemas de control, pero éstos contribuirán a limitar la evasión.

En otro sentido, señor presidente, también en comisión hemos llegado al acuerdo de equilibrar las tasas, permitiendo que los contribuyentes menores que han evadido tengan un trato más justo frente a los mayores.

Asimismo, hemos introducido otro elemento de justicia, al establecer la igualdad de condiciones ante la ley para los que blanquean y los que no tienen que blanquear, porque cumplieron con sus obligaciones. Me refiero a los contribuyentes que anunciaron sus ganancias, pero no pagaron sus impuestos. Estos contribuyentes recibían un castigo, bajo la forma de intereses punitivos y multas, que los ponían en desventaja frente a quienes evadieron y blanquearon, y esto es lo que hemos corregido.

En la Cámara de Diputados, señor presidente, se introdujo al proyecto del Poder Ejecutivo una modificación que consideramos importante;

en ella se estableció que el producido del blanqueo sería coparticipable.

Sin embargo, quedaba un tema pendiente. Resultaba de oscura interpretación si ese producido sería coparticipable en el presente ejercicio —en definitiva, el ejercicio en el que se producirá el blanqueo—, o si lo sería en futuros acuerdos transitorios de coparticipación. Finalmente, en la comisión respectiva de esta Honorable Cámara el punto quedó aclarado. No podemos menos que aprobar este acto de justicia para con nuestro interior postergado.

Hemos llegado acá al acuerdo de que el 3 por ciento de lo recaudado en concepto de tasas se destinará a la Dirección General Impositiva. El restante 97 por ciento se destinará por partes iguales a la Nación y a las provincias, que lo recibirán en concordancia con el acuerdo transitorio de coparticipación vigente.

Por último, y con respecto a este punto, también hemos agregado de común acuerdo una breve cláusula que indica que la distribución se hará en forma automática: día por día, ni bien se perciba un monto por tasa de blanqueo se girará de inmediato a nuestras provincias.

Señor presidente: es necesario que exprese mi profunda emoción ante esta solución, porque no puedo dejar de tener presente el estado de postración económica y financiera de la mayoría de nuestras provincias, que ahora recibirán un impulso material que estoy seguro beneficiará directamente a los comprovincianos del interior.

En otro orden de cosas, hemos incorporado al proyecto llegado de la Cámara de Diputados interesantes consideraciones que había realizado el señor senador Gómez Centurión en su propia iniciativa de blanqueo.

Se realizará una quita del 50 por ciento en las tasas de blanqueo a quienes se comprometan, a través de un sistema de control que quedará en manos de la Dirección General Impositiva, a destinar los fondos regularizados a la inversión en viviendas nuevas económicas; a la adquisición de bienes de capital; a la adquisición de automotores para el transporte de pasajeros o de carga; a la importación de bienes nuevos que no se produzcan en el país y que estén autorizados por la Secretaría de Industria y Comercio Exterior; a la construcción de hoteles o complejos turísticos; a la suscripción de títulos, cédulas u otros certificados equivalentes emitidos por el Banco Hipotecario Nacional o a planes de reactivación de la construcción.

Con este punto, señor presidente, estamos buscando evitar que los capitales blanqueados vuelvan al circuito negro para que en cambio se

incorporen a la producción o a la inversión social en viviendas.

Sin embargo, nuestro bloque propuso una limitación a la aplicación de esos recursos blanqueados. No hemos permitido que se destinen total o parcialmente a la adquisición de empresas del Estado y tuvimos la alegría y el honor de que esta idea fuera compartida por la comisión, lo que nos complace resaltar en este momento.

La intención de esta limitación es clara. Hemos querido evitar que quienes contribuyeron a generar nuestra pesada deuda externa —y ahora pueden blanquear bajo ciertas rigurosas condiciones— puedan tener acceso a bienes nacionales.

Señor presidente: no quiero extenderme más en consideraciones técnicas sino sólo resaltar que hemos puesto nuestra mayor voluntad para que un acto de injusticia como es el blanqueo —y que está motivado en razones de estricta emergencia económica— sea lo menos injusto y lesivo posible para los intereses nacionales.

Ocurre que estamos legislando no en condiciones ideales sino en estrictas circunstancias de miseria derivadas de un proyecto antinacional, de destrucción, que se instauró en el país en marzo de 1976.

Señor presidente: en la comisión hemos coincidido en impulsar este proyecto de ley, que es solamente un paliativo para el país. Es por ello que creo necesario finalizar mi exposición con una exhortación: son las condiciones de una situación que favorece la especulación y la economía negra las que deben ser modificadas.

Y espero sinceramente que así como hemos coincidido ahora, podamos coincidir en el futuro en la idea de promover leyes que nos lleven a una economía de producción y a una justa distribución de la riqueza creada en nuestra patria.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Vidal. — Señor presidente, señores senadores: una vez más el Parlamento se ve abocado a la consideración de un proyecto de regularización impositiva, en buen romance, "blanqueo" de capitales, repitiéndose así un hecho paradójico de los últimos años: el que un procedimiento de excepción haya pasado a convertirse en un dato común.

Se nos dice hoy, como se dijo ayer y antes de ayer, que se trata del último blanqueo; que de ahora en más no volverán a repetirse las anomalías que llevaron a la adopción de este tipo de medidas.

Nos permitimos dudar de la exactitud de tal aserto, y no porque hagamos profesión de fe del escepticismo o porque pretendamos oficiar de augures. Ocurre que la evasión y la economía negra constituyen dos males cuya solución definitiva exige algo más que un nuevo borrón y cuenta nueva. Reclama un replanteo general que apunte hacia cambios estructurales y en cuyo contexto sea posible, a su vez, una profunda reforma tributaria que torne viables aquellos olvidados principios de oro de la ecuación impositiva; o sea la equidad en la imposición de las gabelas, claridad en sus principios y facilidad de percepción en lo referente al aspecto recaudatorio.

Lejos de acercarnos, cada vez nos alejamos más de este ideal. El presupuesto de 1986, recientemente aprobado por este Senado, acusa una presión impositiva del orden del 24 por ciento, récord absoluto en toda la historia económica argentina.

El grueso de las percepciones sigue recayendo, a su vez, sobre la producción y el consumo, en tanto se multiplican los tributos y los cuasitributos, como por ejemplo, el ahorro forzoso. En un país en crisis, donde la especulación predomina lentamente sobre la producción —con sus consiguientes efectos corruptores sobre la moral colectiva—, con empresas que bordean el quebranto, tasas de interés confiscatorias y un creciente desaliento de la inversión, la elevada tasa tributaria constituye de por sí un estímulo a la evasión fiscal.

A esto debemos sumar la fuga de capitales, fenómeno que no se acabó con la instauración del régimen institucional sino que se mantiene vigente frente al incierto cuadro de situación de la economía nacional, la ausencia de posibilidades inversoras y una alta cuota de inseguridad que presenta el país para eventuales inversores.

El impuesto ha dejado de constituir así una herramienta de política fiscal, para pasar a ser nada más que una forma de allegar recursos a las arcas cada vez más ávidas y exhaustas de un Estado que pesa onerosamente sobre el conjunto de las actividades económicas, al tiempo que resulta incapaz de frenar su propia quiebra. Esto se traduce en el deterioro de los servicios y prestaciones a su cargo, en la ineficiencia creciente de la administración y en los salarios paupérrimos de sus trabajadores, tanto en los niveles inferiores de los escalafones como en las "grillas" superiores.

En este contexto, el proyecto de "blanqueo" enviado por el Poder Ejecutivo, más las reformas introducidas por la Cámara de Diputados, constituyen una nueva evidencia de la pertinencia

cia en el error en que incurrieron las distintas conducciones económicas que se alternaron en el poder a lo largo de las últimas décadas.

Este proyecto no tiene otra intención que la de allegar cuatrocientos o quinientos millones de australes a la Tesorería, como un medio de cerrar cuentas que, de otra manera, quedarían abiertas, dando lugar al incumplimiento de las pautas pactadas con el Fondo Monetario Internacional, aun cuando se apele a los artilugios contables habituales para licuar el déficit de las cuentas públicas, tal como lo señaláramos en ocasión de debatir el proyecto de presupuesto.

Esta es la razón fundamental de nuestra crítica al proyecto que está en consideración. No voy a hacer hincapié en la contradicción que guarda esta actitud con posturas asumidas por el radicalismo en otros momentos de la historia política argentina, pues las posiciones no pueden congelarse en el tiempo, y sobre todo frente al impacto de la realidad. Tampoco voy a detenerme a considerar los aspectos éticos de la cuestión, pues entiendo que estamos, antes que nada, frente a un hecho concreto de política económica que debe ser analizado bajo el prisma de qué es lo que favorece o desfavorece a la Nación.

En tal sentido, si un "blanqueo" está destinado a la recuperación de capitales que se manejan en los circuitos negros de la economía y a la repatriación de los cuantiosos recursos que han salido del país, para luego volcarlos a la inversión productiva, puede constituir un importante instrumento promotor del crecimiento, que no puede ni debe ser desdeñado desde ningún punto de vista.

Pero ello requiere un plexo global de política económica. Por la mera magia del blanqueo no vamos a reanimar el fracturado proceso de inversión, no vamos a lograr que vuelvan al país, pagando además un 12 por ciento, según el proyecto original, o un 10 por ciento, de acuerdo con la reforma propuesta. El capital en esta forma no retornará.

Resulta obvio decir que el capital responde a la ley del beneficio, de la misma forma que el metal responde al llamado magnético del imán. Ningún capital va a invertirse en el país si insistimos con políticas económicas como actualmente la del Plan Austral, que persiste en un achicamiento de la economía, en la reducción del mercado interno, en el acotamiento de la rentabilidad empresarial mediante la administración artificial de los precios, en la elevación sostenida de la presión impositiva, en la formulación de mecanismos financieros y monetarios sustentados en el desproporcionado precio del dinero, en la irre-

alidad del tipo de cambio; en suma, en toda una batería de elementos económicos cuya resultante no puede ser otra que el agravamiento de la onda depresiva que el país soporta desde hace una década sin solución alguna de continuidad.

Si realmente queremos favorecer el proceso de inversión comencemos por poner al caballo delante del carro y no a la inversa. Comencemos por devolver realidad y sinceridad a la economía mediante el libre juego de los precios, y entre ellos del salario, que debe dejar de ser variable de ajuste tutelada por los burócratas de turno, para constituir el producto de negociaciones entre trabajadores y empresarios. Empecemos por promover los sectores productivos de rápido efecto reactivante y simultáneamente recortemos drásticamente el gasto público, disminuyamos la carga impositiva y tornémosla más equitativa, liberando a la producción y al consumo de las pesadas gabelas que hoy les oprimen. Restauremos, en suma, el núcleo de la inversión, poniendo a su servicio la política financiera y crediticia; planteemos conductas monetarias que garanticen los flujos monetarios necesarios para garantizar el fluido comportamiento de las transacciones.

Entonces sí, señor presidente, un blanqueo a fondo, despojado de intencionalidad fiscalista, generoso y amplio, podrá efectivamente servir al relanzamiento de la maltrecha economía argentina. Mientras no lo hagamos, seguiremos girando en la misma noria de siempre; jubileo hoy, evasión mañana, jubileo de nuevo pasado mañana; el Estado a su vez seguirá creciendo en su dimensión en relación a la magnitud de su gasto con el tamaño de la actividad privada y, consecuentemente, año tras año nos seguirá demandando ingresos adicionales para mantener la ilusión del relativo equilibrio fiscal, total y absolutamente desbalanceado.

Recordemos lo ocurrido en los últimos tres años. En 1984 fue el impuesto especial sobre los activos financieros. En 1985 el ahorro forzoso. Ahora, el blanqueo. Cabe preguntarse, ¿qué será en 1987?

Entre tanto, señor presidente, seguiremos asistiendo a la puja entre los distintos segmentos del sector público por la apropiación de los recursos originados en la carga tributaria, una puja que tiene su testimonio más elocuente en la carencia de una normativa orgánica que regle el régimen de coparticipación entre la Nación y las provincias. Esta ausencia se hace notoria en el caso de este proyecto, pues se carece de parámetros para decidir los módulos de distribución entre el poder central y los gobiernos

representativos de las autonomías provinciales. Nuevamente nos vemos obligados a improvisar, a caer en el juego de las presiones, en el que el Estado nacional se niega a reconocer lo que en rigor de justicia corresponde a las provincias y en el que éstas se ven obligadas al continuo peregrinaje hacia la capital, para obtener un poco de oxígeno que les permita seguir viviendo precariamente, en medio de la quiebra de las economías regionales, que constituyen su base material, y ante el permanente peligro de ver desmoronarse sus administraciones locales.

En síntesis, se insiste otra vez en la perniciosa técnica legislativa de introducir en determinados proyectos temas que nada tienen que ver con ellos, como es el caso de la modificación del impuesto de sellos o del cambio en el régimen de procedimiento de la DGI, tópicos ambos que deberían ser objeto de legislación específica y tratados por la Legislatura.

Señor presidente: estamos a punto de culminar el tercer período ordinario de sesiones de esta nueva etapa en la vida institucional de la República, etapa en la que el país depositó sus legítimas esperanzas luego de tantos años de frustraciones y después de tanto dolor argentino. Sin embargo, no se avizoran señales que indiquen cambios de rumbo. Lejos de eso, se insiste con parches y remiendos —como este proyecto de blanqueo— destinados a resolver cuestiones parciales y apremios coyunturales, en tanto el país sigue precipitándose por la pendiente inclinada de su decadencia.

Es hora de que el gobierno y el partido gobernante, con el aval logrado en las urnas y del que nosotros, los desarrollistas, somos celosamente respetuosos, comience a emitir señales claras para encolumnar al pueblo argentino tras el objetivo básico y absolutamente prioritario del actual momento: lanzar una atrevida política de grandeza capaz de sacarnos del pantano de la más grave crisis soportada por esta Nación a lo largo de su historia.

De todas maneras, para no negarle a la administración los fondos que necesita y para darle a los contribuyentes alguna oportunidad, aunque mezquina, para regularizar su situación, adelanto mi voto favorable en general al despacho de la comisión.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Villada. — Señor presidente, señores senadores: nuestro bloque quiere expresar a esta Cámara su coincidencia en general con la solución que plantea este proyecto de blanqueo de ca-

Coincidimos, como también lo hacíamos allá por 1984 —cuando planteamos a algunos señores senadores del oficialismo la necesidad de la adopción de una medida de esta naturaleza— en que no se trata, precisamente, de una medida o de un acto de justicia frente al contribuyente que mantiene una conducta recta.

En 1984 salíamos de un proceso de destrucción nacional que, indudablemente, a pesar de esta injusticia, hacía necesario paradójicamente proceder a una regularización en los patrimonios y en las obligaciones impositivas de todos los contribuyentes del país que habían sido sometidos a un devastador proceso de destrucción en sus economías individuales.

Nosotros pensamos que esta medida ha llegado un poco tarde; pero, de todas maneras, seguimos pensando que constituye una necesidad para ir regularizando todo nuestro sistema impositivo y para que todos nuestros contribuyentes, fundamentalmente nuestra clase empresaria, puedan normalizar su situación frente al fisco. Digo esto porque a pesar de haber transcurrido tres años desde que alcanzamos nuevamente la institucionalización, todavía la mayoría de ellos no han podido remediar la situación creada por ese proceso devastador que padecieron desde 1976 hasta 1983.

No obstante lo dicho, creo que en este proyecto no existe una nítida separación entre los sujetos de los impuestos, argentinos o no, que han optado por poner todo su esfuerzo al servicio de la Nación, más allá de que hayan cumplimentado debidamente sus obligaciones impositivas o no, y aquellos que realmente con *animus diabolicus* han posibilitado, a través de ilícitos, un grave perjuicio al fisco nacional o han contribuido deliberada y maliciosamente al endeudamiento del país.

Nuestro bloque, señores senadores, está de acuerdo en que hagamos raya y cuenta nueva para los primeros, para aquellos que decididamente estuvieron al lado de la Nación, que estuvieron al lado de nuestro pueblo, pero jamás —esto queremos expresarlo categóricamente y terminantemente— vamos nosotros a prestar consentimiento a una falta de sanción, a una autoamnistía o a una impunidad para los segundos.

Decimos esto porque no nos lo permiten nuestros principios doctrinarios; no nos lo permite nuestra conducta ética; no nos lo permite nuestra propia valoración de los intereses de la Nación y —por qué no decirlo también, señores senadores— porque no nos lo permiten nuestras propias entrañas.

Creo que en esta dirección ya se hizo bastante en la Cámara de Diputados, donde nuestro propio bloque ha disentido con el dictamen de la mayo-

ria. Nosotros queremos ser muy sinceros y expresar nuestro reconocimiento al dictamen de la mayoría, que ha suprimido el capítulo V del proyecto original, que posibilitaba la regularización precisamente de las irregularidades cambiarias.

Se ha suprimido así la permisividad que hubiese conducido a la normalización en la tenencia de títulos representativos de la deuda externa. Si bien a simple vista sería algo muy posible de normalizar a través de un "blanqueo", sabemos que en el trasfondo puede estar encubriendo maniobras en virtud de las cuales todos nosotros estamos pagando un alto precio, una alta carga en razón de los intereses que tenemos que girar por los servicios de nuestra deuda.

Esto creaba una gran duda para nosotros por la forma como venía planteado el proyecto del Poder Ejecutivo. La gran duda o interrogante se refería a que podríamos estar otorgando un bill de indemnidad a quienes se encontraban en el segundo grupo que acabo de señalar.

Felizmente la reflexión y la prudencia de los señores diputados de la Nación los ha llevado a excluir ese capítulo, lo cual nos da una gran tranquilidad. Seguimos pensando, sin embargo, que para separar nitidamente las dos cosas el tema necesita ser redondeado, necesita ser ajustado y perfectamente acotado para que no haya lugar a dudas de que nosotros queremos el blanqueo para todos nuestros empresarios, para todos nuestros contribuyentes que han prestado y prestan realmente un servicio efectivo a la Nación. No queremos blanqueo, no queremos regularizar la situación de aquellos que con sus ilícitos han destruido al Estado y el fisco nacional y nos han endeudado en forma monstruosa, con una carga que están soportando todos los argentinos con gran sacrificio.

Señores senadores: también queremos señalar algo sobre la oportunidad en que estamos tratando este proyecto, como dije hace unos momentos. Me refiero a la ocasión en que estamos considerando esta norma tan importante que, indudablemente, requiere del consenso de toda nuestra sociedad en la búsqueda de los objetivos que nos son comunes.

Debemos reconocer que en la actualidad estamos con un Plan Austral casi deteriorado; padecemos un rebrote inflacionario, que está unido a la recesión y desocupación por la que estamos atravesando. Todo ello dentro de un clima de inestabilidad social, por qué desconocerlo. Además el empresario exige y requiere una menor presión tributaria y existen funcionarios de la administración que están siendo cuestionados por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas

En una palabra, este clima, que es real, prácticamente va a restar eficacia a los objetivos que se persiguen con este proyecto de ley; debemos ser conscientes de esta realidad. Cuando votemos la iniciativa no habremos de alcanzar los objetivos que si podríamos haber logrado si el proyecto hubiera sido planteado en tiempo oportuno, es decir, cuando retornábamos a la normalización constitucional.

Nuestro bloque también quiere expresar a los señores senadores que, cuando prestamos consenso a esta iniciativa, no nos circunscribimos únicamente al objetivo mezquino de la recaudación fiscal. En este Senado y en la Cámara de Diputados se han presentado proyectos que no son típicamente los de un blanqueo, aunque realmente buscaban la solución de nuestros problemas en esta materia. Precisamente, el senador Gómez Centurión presentó un proyecto que tiene como objetivo la ampliación del mercado de capitales para reforzar la industria y la tecnología y merece, más allá de la evaluación que podamos hacer en particular, nuestro juicio positivo, que extendemos también a esos otros proyectos que acabo de mencionar. Dichas iniciativas tienden a ligar el objetivo de la recaudación con el de la reactivación de nuestra economía. Por eso dije que nuestro bloque no se circunscribire, cuando analiza este proyecto de ley, al hecho de reunir fondos para solucionar los problemas que pueda tener el Estado nacional. Reconocemos que pueden existir, pero también es necesario avanzar un poco más allá; por eso me complace la solución que ha logrado la Comisión de Presupuesto y Hacienda pues ha compatibilizado este pensamiento del señor senador Gómez Centurión y lo ha insertado en este proyecto. Quiere decir que no buscamos únicamente la recaudación, sino que vamos un poco más allá, vamos al objetivo central, a buscar la solución del problema económico central de nuestro país: acumulación, ahorro, aplicación, desarrollo. Para esto se han incorporado algunos artículos, que son los últimos, por los cuales quienes inviertan y desarrollen procesos de inversión en nuestro país, pagarán menos impuesto. Es decir que nuestra mira no está puesta únicamente en la recaudación, sino que tendemos a dar solución real y cierta a los problemas que nos están agobiando.

Todos sabemos que nuestra inversión apenas supera las necesidades de la amortización, del mantenimiento de nuestro stock disponible de capital. Quiere decir que prácticamente nos encontramos en un estado de inversión cero. Y también sabemos que el ahorro global, base del proceso de acumulación, está comprometido por

las exigencias de las obligaciones externas, por las filtraciones que se producen por causa de la economía negra y por el flujo internacional de capitales que, por cierto, es bastante negativo. Estas circunstancias nos están llevando —lo vemos todos los días— poco menos que a la postulación económica y a la injusticia social.

Por eso, señores senadores, nosotros vamos a prestar en principio nuestro consenso para la aprobación de este proyecto. Pero, vuelvo a insistir, nuestro consenso tiene un límite: no vamos a permitir el blanqueo de la deuda ilegítima ni de la de aquellos que mediante artimañas y procedimientos mañosos han contribuido al endeudamiento de la Nación, sin una contrapartida en bienes y servicios. Tampoco vamos a permitir el saneamiento de la situación de los que en nuestro país han delinquido abiertamente y han dañado al fisco nacional. Para todos aquellos que pudieran haber incurrido por las propias circunstancias y necesidades del país en actitudes dudosas, pero que se quedaron, que sufrieron y siguen luchando para el país, para esos, todo; para los otros, nada. ¡Nada!

En este punto tenemos que persistir. Yo creo que el Honorable Senado debe dar ejemplo a la Nación. Debe mostrar a todos los ciudadanos que no está dispuesto a encubrir a los que delinquieron abiertamente contra la Nación.

Por ello, señor presidente, vuelvo a insistir, nosotros coincidimos en el ordenamiento del tratamiento técnico.

Discrepo de la idea —y a esto ya se refirió el señor senador Murguía— de que en una ley tan específica y típica del orden fiscal, referida a la regularización de impuestos, se hayan introducido otros temas como reformas de tasas de impuestos, modificación a la ley 11.683 o régimen especial de empadronamiento. Pero ya está hecho, y nosotros hubiéramos preferido que cada uno de estos temas fuera tratado con la reforma de la ley correspondiente. Sin embargo, como dije, ya está hecho; y no creemos que ésta, a la que nosotros por ahí llamamos "ley omnibus", sea la mejor práctica legislativa.

Ahora bien, trataremos de perfeccionar el proyecto proponiendo durante el tratamiento en particular las modificaciones necesarias para que queden bien diferenciados estos dos grandes grupos a que me he referido.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Gómez Centurión. — Señor presidente: no puedo dejar de resaltar la sensibilidad y preocupación manifestadas por mis distinguidos colegas, en especial por los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en relación

con el hecho de no haber escatimado esfuerzos en pos de encontrar una solución a un tema que en particular me viene afligiendo y que, considerada su importancia, reclama la respuesta que hoy le podemos brindar, siquiera en parte.

A nadie es ajeno que el país necesita ideas y pautas claras y concretas, tendientes a buscar la reactivación de su producción nacional. Tampoco es menos cierto que, para su despegue, dicha reactivación necesita, entre otras cosas, nuevos capitales que la oxigenen y alimenten en un proceso multiplicador.

Tan veraz es lo señalado como el hecho de la existencia de importantes capitales argentinos colocados financieramente en el exterior o de otros que yacen en la llamada "economía negra", que opera subterráneamente en nuestro sistema económico y cuyo descontrol revierte negativamente en dicho sistema ya que se procede con un fin netamente especulativo.

Por lo tanto, es válido pensar que una normativa que propicie la reinyección de capital genuino en un actual sistema productivo vacilante y en una industria contraída y, por momentos, recesiva, acelerará la inversión productiva, generando un proceso de continuo crecimiento y acumulación de riquezas para lograr, en definitiva, una mejor y más justa distribución de ellas.

Debo señalar, señor presidente, que "los activos externos de residentes argentinos", como los llama el doctor Enrique García Vázquez —quien, dicho sea de paso, ha sido una de las personalidades que más ha manifestado su permanente vocación por encontrar salidas genuinas tendientes al retorno de esos capitales—, oscilan entre los 20 mil y los 35 mil millones de dólares, según cada una de las fuentes indicadas.

Por lo tanto, es importante no sólo conocer las verdaderas causas de esa emigración de capitales para evitar repetición de esas conductas, sino —y esto lo creo más importante por la coyuntura y finalidad— conformar conceptos que se transformen en un puente de retorno de esos dineros, en tanto y en cuanto sean orientados al aparato productivo nacional.

Claro está también para mí, señor presidente, que tan sólo una ley o normativa dentro de una ley general no brinda por sí una solución integral al problema.

Debe entenderse —y así, creo, piensan mis distinguidos colegas— que una norma no es más que una herramienta útil que deberá ser complementada y apuntalada por una política económica sólida, con reglas de juego limpias que le confieran al sistema el elemento clave de

toda esta problemática: la confianza. Esta no se impone ni, menos aún, se legisla; pero si demuestra con convicción y voluntad política lo que este Parlamento está en condiciones de ofrecer.

Por otro lado, es cierto que no es posible determinar con certeza el momento en que acontecerá el efectivo retorno de esos activos. Depende de muchísimas variables: unas de orden nacional y otras de orden internacional. Pero es posible que ello ocurra antes de lo esperado y, en consecuencia, es indispensable que estén preparados los mecanismos adecuados para que este importantísimo aporte al crecimiento nacional no se vea trabado por inconvenientes de tal naturaleza que hagan perder esta oportunidad que posee la Argentina, y con la que no cuentan otros países deudores.

También estas reflexiones de fondo le caben a aquellos dineros que están operando especulativa y subrepticamente en los mercados negros de nuestro país.

Señor presidente: vengo trabajando desde hace dos años en esta proyección rectora porque tengo la firme convicción de que cualquier economía que se precie de sana, estable y con futuro debe estar apoyada en un proceso de producción constante y mi idea es una manera genuina de alentarlo. Todo ello debe redundar en el hecho del traslado de capitales no radicados en el país, o ubicados en él, hacia un circuito netamente productivo: la creación de riquezas en el país para su beneficio y el de sus habitantes, proporcionándoles un mayor bienestar; el desarrollo de las actividades nacionales, industriales, comerciales y de servicios; la aplicación al desarrollo de los grandes proyectos nacionales; el ahorro de divisas; el desarrollo de actividades que permitan la reocupación de la mano de obra, creando por ende nuevas fuentes de trabajo; el aliento a una industria sin chimeneas pero no por ello menos importante, esto es el turismo, en la construcción de nuevos complejos para la infraestructura del sector; la construcción de nuevas viviendas, que también obre como paliativo social a otra gran problemática nacional, cual es la del déficit habitacional.

Con esta óptica es entonces realmente valioso idear caminos para invitar y estimular a un sinceramiento y a un pronto retorno de capitales que emigraron en otra época en pos de una mejor rentabilidad y seguridad. Pero también debemos saber que no existirá una voluntad demostrada en los hechos —por parte de los titulares de esos bienes— de reincorporarlos al sector productivo si no procuramos

extremar nuevas reglas de juego que los alienten en esa dirección.

Quizá si lo analizamos desde una posición fiscal se puede pensar en un costo elevado; pero ese esfuerzo inicial reclamado redundará con creces en un futuro, ya que una de las consecuencias lógicas del aumento de la productividad —aparte de las ya indicadas— será entonces un genuino aumento de la recaudación fiscal.

De todas maneras, entiendo las urgencias del Poder Ejecutivo por encontrar nuevas fuentes de ingreso fiscal, por lo cual mi voto no será un obstáculo para que se apruebe el proyecto que se encuentra sobre nuestras bancas. Sin embargo, señor presidente, no obstante que se está tratando una ley de blanqueo, quiero dejar sentado que el sentido de mi voto está dirigido fundamentalmente hacia el concepto precedentemente expuesto; es decir, legislar señales firmes y practicables que sin ninguna traba y, menos de tipo fiscal, tiendan a incorporar capitales ubicados en el exterior, o localmente en el circuito especulativo, para que se apliquen a la definitiva reactivación de la producción nacional.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. León. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Señor presidente: estoy de acuerdo en los aspectos que marca este proyecto referentes a las mayores atribuciones que se dan a la Dirección General Impositiva, a la mejora de la ley de sellos, al reempadronamiento y por supuesto, a la mejor coparticipación federal; pero quiero anunciar que por razones de principios voy a votar en contra.

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consideración en particular.

—Se lee el artículo 3º de la sanción de la Cámara de Diputados.

Sr. Villada. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Villada. — Señor presidente: yo anticiparía un poco los artículos que vamos a modificar, a los efectos de que al pasar a su votación no quede ninguno de ellos pendiente de reforma. De lo contrario, la ley no quedaría como una unidad total; y creo que no serviría al cumpli-

miento de los objetivos que todos nosotros estamos buscando.

Desde ya anticipo que los artículos 2º, 4º, 8º, 11, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 41, 42, 44, 48, 50, 53, 54 y 56, más aquellos últimos artículos que se incluyeron con motivo de las proposiciones del señor senador Gómez Centurión, van a modificarse a los efectos de perfeccionar su redacción.

Sr. Trilla. — ¿A cuáles se refiere?

Sr. Villada. — Me refiero a los que están en el dictamen, señor senador.

Hago estas manifestaciones a los efectos de que cuando se pase a la votación no demoremos el tratamiento de los artículos.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 2º.

Sr. Villada. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Villada. — Señor presidente: en este artículo 2º, a los efectos de compatibilizarlo con el artículo 48 y las modificaciones que se van a introducir en él, propongo que después de su última palabra, donde dice "... compras, cambio o permuta de divisas", se agregue: "salvo respecto de las situaciones contempladas en el artículo 48".

Con esto quedaría perfectamente coordinado y coherente este artículo 2º, de acuerdo con la redacción definitiva que tendrá el artículo 48.

Sr. Trilla. — Hasta ahora no hemos modificado el artículo 48.

Sr. Villada. — Pero lo vamos a modificar. Recuerde, señor senador, que anticipé que iba a proponer una modificación.

Sr. Trilla. — Entiendo que con la expresión que vamos a incluir queda bien aclarado el tema. Por lo tanto, creo que no tiene sentido modificar el artículo 2º.

Sr. Villada. — Con la modificación que vamos a introducir en el artículo 48 sí, señor senador; de lo contrario, va a quedar totalmente desfasado.

Sr. Trilla. — No hay objeciones, señor presidente.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 2º, con la modificación propuesta.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba el artículo 3º.

—Se lee el artículo 4º.

Sr. Trilla. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

Sr. Trilla. — En el artículo 4º el dictamen hace una modificación. Figura en el dictamen que está en Secretaría...

Sr. Brasesco. — Ya está todo modificado.

Sr. Trilla. — ...en todo caso habría que hacer llegar el dictamen al señor senador Villada.

Sr. Villada. — El artículo 4º, con la modificación propuesta en el dictamen, está aceptado.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º, con la modificación propuesta en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban los artículos 5º al 7º.

—Se lee el artículo 8º.

Sr. Trilla. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

Sr. Trilla. — En este artículo hay una modificación propuesta que ya ha sido aceptada.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 8º, con la modificación propuesta en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban los artículos 9º y 10.

—Se lee el artículo 11.

Sr. Trilla. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

Sr. Trilla. — Señor presidente: este artículo tiene modificaciones propuestas en el dictamen.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 11 con la modificación propuesta en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban los artículos 12 al 16.

—Se lee el artículo 17.

Sr. Gómez Centurión. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Gómez Centurión. — Señor presidente: quisiera proponer un agregado en el inciso b) del artículo 17. Allí se dice: "Quedarán liberados de toda acción civil, comercial, penal, ad-

ministrativa y profesional..."; pienso que también se debería agregar la expresión "cambiaría".

Esto se basa en la idea expuesta en mi proyecto porque fundamentalmente se pretende la incorporación de activos líquidos de moneda de cambio. En consecuencia, también debería estar considerada la liberación por las acciones cambiarias, lo que sería coherente con la propuesta que se formula en la parte final del proyecto.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Señor presidente: dejaré de lado la opinión personal que como profesional pueda tener respecto del asunto cambiario.

Sobre el particular hemos discutido muchísimo en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en la que han intervenido los señores senadores Murguía, Nieves y Villada, así como otros legisladores del sector radical.

Allí tuvimos en cuenta —y repito que esto está más allá de mis propias convicciones— la discusión que sobre el tema se realizó en la Cámara de Diputados, en la que intervinieron representantes de los bloques radical y justicialista, entre otros. Durante el debate se contempló este aspecto y no se lo aprobó por razones de tipo más ético que profesionales.

En consecuencia, si introducimos esta modificación, tendríamos dificultades para su aceptación en la Cámara de Diputados. Y nuestra intención es sancionar un proyecto que al margen de su flexibilización no encuentre lógicamente inconveniente en su tratamiento posterior en la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Villada. — Señor presidente: efectivamente, nosotros podríamos realizar un gran recuento de todo lo debatido en la Cámara de Diputados con respecto a la supresión de este término.

Creo que es un aspecto que está perfectamente explicitado y aquí tendríamos que exponer más de una hora y dar lectura a todo lo que se dijo en la otra Cámara, en la que se resolvió por unanimidad la supresión de este término.

Esto tendió a alcanzar los objetivos que había señalado pero, para tranquilidad del señor senador Gómez Centurión, le sugeriría que leyera con detenimiento el artículo 17 porque allí encontrará seguramente la solución que está persiguiendo mediante la atenuación del régimen sancionatorio.

Prácticamente hay una liberalización de las penas tan grande que no tendría sentido incluir este término tal como lo propone el señor senador por San Juan.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 17.

—La votación resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban los artículos 18 a 27.

—Se lee el artículo 28.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 28 con las modificaciones introducidas en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 29.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 29 con las modificaciones introducidas en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba el artículo 30.

—Se lee el artículo 31.

Sr. Presidente. — El dictamen propone la supresión de este artículo.

—Si no se hace uso de la palabra, se va a votar dicha supresión.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 31, ex 32.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 31 con las modificaciones introducidas en el dictamen, que antes era artículo 32.

—La votación resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban los ex artículos 33 a 35, que pasan a ser artículos 32 a 34 tal como figuran en el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados.

—Se lee el ex artículo 36, que ahora pasa a ser 35.

Sr. Presidente. — El dictamen propone la sustitución de su redacción.

—Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con el nuevo texto que figura en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el ex artículo 37, que pasa a ser 36.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, con la modificación introducida en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban los ex artículos 38 a 40, que pasan a ser artículos 37 a 39.

—Se lee el ex artículo 41, que pasa a ser artículo 40.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 40, ex artículo 41, con la modificación introducida en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el ex artículo 42, que pasa a ser artículo 41.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 41, ex artículo 42, con el texto que figura en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba el ex artículo 43 que pasa a ser artículo 42.

—Se lee el ex artículo 44, que pasa a ser artículo 43.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 43, ex artículo 44, con el texto que propone el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban los ex artículos 45 a 47, que pasan a ser artículos 44 a 46.

—Se lee el ex artículo 48, que pasa a ser 47.

Sr. Villada. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Villada. — Voy a proponer una modificación al texto de este artículo, de acuerdo con el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados.

Efectivamente, alcanzando los objetivos que nosotros señalamos, la Cámara de Diputados sancionó esta norma prohibiendo la regularización patrimonial e impositiva a funcionarios del Estado. Creo que han caído en exceso de celo, pues han incluido en esta prohibición de normalización a funcionarios con categoría de director.

Señor presidente: creo que los funcionarios que realmente integran la voluntad del Estado son los ministros. Si quisiéramos extender la norma un poco más, podríamos decir que los secretarios de Estado cumplen con algunas for-

malidades o solemnidades, como por ejemplo prestar juramento. Pero de aquí para abajo entiendo que no debemos presumir que puedan incurrir en algún tipo de ilícito, ya que éstos pueden únicamente cometerlos quienes están en condiciones de asumir la voluntad del Estado.

Por lo expuesto, considero que la norma sancionada por la Cámara de Diputados que extiende la prohibición de la normalización a los funcionarios con categoría de director nacional o su equivalente, no tiene mucho sentido. Por eso, voy a proponer que esto se modifique.

Por otra parte, quizá por incurrir en un exceso de celo o de prudencia, se han establecido fechas que van desde el 25 de marzo de 1976 hasta nuestros días y también hacia el futuro. Considero que esto tampoco tiene sentido.

En diciembre de 1983 nosotros logramos el funcionamiento normal de nuestras instituciones. Cuando ellas funcionan de esta manera tienen sus propios mecanismos de corrección. Entonces, no hay razón para extender este plazo. Si algún hecho anormal se produjo a partir del 10 de diciembre de 1983, que sean los propios organismos correctores que posee el mecanismo institucional, constitucional y legal del país los que se preocupen por corregirlo. Yo creo que es un exceso hacer esta previsión en la norma. Por ello solicito el cambio de redacción.

Más aún, en el ánimo de perfeccionar totalmente nuestros objetivos, nosotros queremos que todos nuestros empresarios, contribuyentes y ciudadanos que se encuentran incursos en alguna anomalía de tipo tributario puedan normalizar su situación. Pero lo que no queremos, vuelvo a insistir, es que lo hagan aquellos que deliberada y malintencionadamente han causado daños a la Nación.

Por ello propongo que el artículo 47 quede redactado de la siguiente forma: "Exclúyense del régimen de la presente ley las personas físicas, sucesiones indivisas y los sujetos mencionados en el artículo 1º que tengan deudas con acreedores del exterior que se hayan originado en el mecanismo comúnmente denominado autopréstamo u otros que hayan aumentado la deuda pública y privada sin contrapartida o en las que no pueda probarse su inversión o destino, salvo que al acogerse a los beneficios del régimen de normalización salden su obligación sin afectar las disponibilidades de divisas internas...". Esto, en lo que se refiere al endeudamiento.

Y continúa el artículo: "Quedan excluidas las personas físicas, sucesiones indivisas y sujetos antes citados que hubieren obtenido incremento patrimonial como producto de ilícitos pe-

nales o civiles generadores de daños al patrimonio del Estado, excepto los originados en el cumplimiento de las leyes tributarias...".

Prosigue: "...La liberación establecida en el inciso b) del artículo 17 para estos casos no alcanza al Estado en el caso de que éste resulte perjudicado. También quedan excluidos de la normalización los incrementos patrimoniales obtenidos por parte de los funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales a partir de la categoría de secretario de Estado hasta la Presidencia de la República inclusive que se hubieran desempeñado a partir del 25 de marzo de 1976 hasta el 9 de diciembre de 1983, ambas fechas inclusive, incluido aquellos que hubieren prestado servicios en un período parcial de tiempo comprendido entre las fechas mencionadas. Asimismo, quedan excluidos de igual forma quienes se hubieran desempeñado como directores o administradores o en funciones equivalentes en las empresas del Estado".

Con esta redacción el artículo queda diez puntos. Como está es una barbaridad.

Sr. Trilla. — Señor presidente: no sé si es conveniente introducir así, someramente, tantos cambios en leyes de esta naturaleza. Con el señor senador Villada y otros señores senadores habíamos conversado acerca de la modificación del artículo 48 en el aspecto referido a la exclusión de los funcionarios. Incluso, a posteriori del dictamen de la comisión, habíamos llegado al acuerdo de excluir del "blanqueo" a todos los funcionarios públicos desde la categoría de director nacional o equivalente hasta el presidente de la República. No obstante, teniendo en cuenta las argumentaciones que expuso muy bien el señor senador Villada en la comisión, quedó claro que no correspondía que estuvieran incorporados en esa excepción todos los funcionarios de igual categoría del actual régimen político argentino. Precisamente, el sistema tiene sus propias instituciones y reglamentaciones y, como en toda nación con vigencia del estado de derecho, está la Justicia, que puede intervenir ante cualquier inconducta ética en que incurra algún funcionario. Eso pareció bien y lo hemos corregido.

No obstante, con anterioridad a este tema, he escuchado una prolongada redacción expuesta por el señor senador Villada, que en este momento no puedo analizar si está bien o mal. Esta es una cuestión que no la habíamos considerado en su momento.

Por otra parte, insisto en que para la elaboración de cualquier ley —en esto deben saber mucho más los abogados acá presentes

que los contadores, como el señor senador Villada y yo—...

Sr. Menem. — No crea.

Sr. Trilla. — ...las modificaciones realizadas sobre la marcha, por más preconceitos, estudios previos y conocimientos doctrinarios que se posean —y estoy convencido de que el señor senador Villada los tiene—, pueden alterar el tejido del sistema rentístico constituido por distintas leyes, textos ordenados, diferentes disposiciones, de modo que, tal vez con la mejor intención, se puede lesionar la transparencia de un proyecto que creo que está bastante bien redactado. Nunca existe la perfección, pero de cualquier manera creo que hemos arribado a soluciones importantes en este proyecto.

Por esas razones, le pido al señor senador Villada que nos constriñamos a lo que conversamos hasta hace poco, hasta hace una hora, acerca de las distintas modificaciones fundamentales con las que lleguemos a soluciones concretas. De esa manera, tendremos tranquilidad espiritual al emitir nuestro voto y evitaremos que cuando el proyecto sea devuelto a la Cámara de Diputados ella encuentre que algún artículo o inciso de una ley no derogada está en contradicción con alguno de los aspectos mencionados.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Lafferrière. — Señor presidente: por disciplina de bloque y por ser miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside tan dignamente el señor senador Trilla, voy a votar lo que el presidente de la comisión aconseja. Pero quiero hacer notar a la Cámara que hay un aspecto de este artículo que puede ser cuestionado. Me refiero al límite de fechas impuesto para la excepción del "blanqueo" por parte de funcionarios que actuaron hasta el 10 de diciembre de 1983, dejando abierta la posibilidad de hacerlo —aunque estén en funcionamiento las instituciones democráticas— a quienes somos funcionarios del actual régimen constitucional.

Entonces, alerto a todos los señores senadores sobre esta cuestión, teniendo en cuenta la hipersensibilidad con que se suelen valorar los pronunciamientos legislativos. En este caso, se trata de una sanción que va a decir que no pueden "blanquear" quienes han sido funcionarios hasta el 9 de diciembre de 1983 y que sí pueden hacerlo quienes han sido o son funcionarios de este gobierno constitucional.

Por esta razón, opino que es más conveniente la redacción aprobada por la Cámara de Diputados, autoinhibiéndonos no solamente co-

mo legisladores sino también como hombres del gobierno democrático, para que nadie pueda pensar o sospechar, ni siquiera insinuar, que estamos haciendo una ley que nos permita blanquear como legisladores y funcionarios.

Repito esto sin perjuicio de que apoyaré, por respetar la disciplina de bloque y de la comisión, lo que en última instancia decida el senador Trilla.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Como consecuencia de una observación referida a los límites de lo moral, de lo ético y que nos puede afectar directamente, me parece prudente que hagamos un cuarto intermedio de cinco minutos en las bancas para llegar a una solución sobre lo conversado anteriormente, sobre todo porque entiendo muy importantes las observaciones morales, inclusive más que las técnicas.

En consecuencia, no quisiera definir un mecanismo que después pueda merecer observaciones.

Prefiero lograr anuencia en el tema, ya que ha sido una exquisitez tratarlo.

El cuarto intermedio nos permitirá encontrar una redacción acorde con los criterios expuestos.

Sr. Cass. — Apoyo la moción del señor senador Trilla.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción del señor senador por la Capital.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Invito al honorable cuerpo a pasar a un breve cuarto intermedio, permaneciendo los señores senadores en las bancas.

—Son las 20 y 16.

—A las 20 y 19:

Sr. Presidente. — Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Entonces, respecto de la modificación del ex artículo 48, la fecha tope que deberíamos colocar es el 31 de diciembre de 1985 porque es la misma fecha que se toma para realizar los ajustes dispuesta por el "blanqueo"; el resto quedaría tal como se expresó antes. En concreto, la redacción sería así: "...que se hubieron desempeñado a partir del 25 de marzo de 1976 y hasta el 31 de diciembre de 1985, ambas fechas inclusive, incluidos aquellos que hubieran prestado servicios en un período parcial de tiempo comprendido entre las fechas mencionadas...".

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Villada. — Coincido con lo que propone el senador Trilla. Es decir, la redacción quedaría tal como la he leído más la modificación que propone el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — ¿En qué sentido dice usted que quedaría igual?

Sr. Lafferrière. — ¿Cuál sería la redacción correcta del artículo, señor presidente?

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura a la redacción...

Sr. Berhongaray. — Perdón, señor presidente, pero quiero proponer que por los mismos motivos que se han dado se agregue en la nómina de funcionarios excluidos a los legisladores. Estamos creando una exclusión para el Poder Ejecutivo y nosotros no podemos quedarnos afuera...

Sr. Trilla. — Tal vez sería correcto desde un punto de vista ético, pero los legisladores no estamos incluidos en el impuesto a las ganancias, respecto de nuestras dietas, que están exentas de él.

Sr. Velázquez. — Con el criterio del senador por La Pampa habría que excluir también a los jueces...

Sr. Solana. — Que se lea el texto completo del artículo, señor presidente.

Sr. Presidente. — Por Secretaría se va a dar lectura al texto...

Sr. Brasesco. — ¡Acá hay mucha improvisación!

Sr. Presidente. — ...del ex artículo 48, con la modificación propuesta por el señor miembro informante.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee): "Quedan excluidos de la normalización los incrementos patrimoniales obtenidos por parte de los funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, a partir de la categoría de director nacional o equivalente hasta la de presidente de la República, inclusive, que se hubieran desempeñado a partir del 25 de marzo de 1976 y hasta el 31 de diciembre de 1985, ambas fechas inclusive, incluidos aquellos que hubieran prestado servicios en un período parcial de tiempo comprendido entre las fechas mencionadas. Asimismo, quedan excluidos de igual forma quienes se hubieran desempeñado como directores, administradores o en funciones equivalentes de las empresas del Estado".

Sr. Berhongaray. — Precisamente allí es donde propongo incluir a los legisladores nacionales y provinciales...

Sr. Mathus Escorihuela. — ¿Y a los gobernadores...?

Sr. Cass. — ¿Y a los embajadores...?

Sr. Brasesco. — ¿Y a los obispos...? Total, ya que estamos...

Esto es fruto de las improvisaciones. Por eso pienso que es mejor dejar las cosas como están y aceptar el texto que acaba de ser leído por Secretaría.

Sr. Presidente. — En consideración el ex artículo 48, tal como acaba de ser leído por Secretaría...

Sr. Berhongaray. — Que conste mi voto en disidencia parcial, señor presidente.

Sr. Gass. — Y el mío también, señor presidente.

Sr. Brasesco. — ¿Qué es lo que se está blanqueando? Hay que explicar bien lo que es una ley de "blanqueo" para saber quiénes pueden quedar excluidos y quiénes no. Si seguimos aumentando la lista de exclusiones, también habría que agregar a los concejales...

Sr. Velázquez. — ¿Me permite el uso de la palabra, señor presidente?

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Velázquez. — Ruego al señor senador por Entre Ríos que me deje expresar mi opinión sobre este punto.

Yo entiendo que si lo extendemos a los funcionarios del Poder Ejecutivo, es elemental que debemos incorporar también a los legisladores nacionales.

Sr. Berhongaray. — Así es.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Villada. — Señor presidente: debe tenerse presente que la redacción que yo propuse alude a las categorías de secretario hasta presidente de la República. Como no se hace ninguna distinción, todos quedan incluidos. A ninguno de ellos le está permitido normalizar su situación.

No lo tengo todavía en claro pero pienso que dentro de esa norma también estarían incluidos los legisladores. Si el señor senador Berhongaray quiere que se diga expresamente, nosotros no nos oponemos.

Sr. Berhongaray. — De acuerdo. Que se diga expresamente.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — En la forma como está redactado; yo entiendo que es limitativo. Debería mencionar a los integrantes de los tres poderes del Estado, tanto del nacional como del provincial.

Sr. Brasesco. — Entonces tendrá que estar incluida la comuna de Buenos Aires: el intendente y los concejales.

Sr. Menem. — Propongo, entonces, que sea lo más amplio posible: los tres poderes del Estado, tanto nacional como provincial y municipal.

Sr. Villada. — Pero, ¿a quiénes?

Sr. Presidente. — La Presidencia observa que el ex artículo 48 se refiere a los funcionarios públicos sin distinguir que sean del Poder Judicial o del Ejecutivo. Habla de funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales. Faltaría incluir la palabra "legisladores". Sin ánimo de intervenir en el debate, considero que bastaría con incluir esa palabra, porque la expresión "funcionarios públicos" incluye a los judiciales.

Sr. Menem. — No, señor presidente. Los jueces siempre se consideran magistrados. Nunca se los incluye en la categoría de funcionarios públicos, que está reservada al ámbito del Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Comparto la posición del señor senador Menem y propongo la siguiente redacción: "...funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales de los tres poderes, a partir de la categoría de director nacional..."

Sr. Trilla. — Acepto, señor presidente.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 47, ex artículo 48, con la modificación propuesta por el señor senador por San Luis.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba el artículo 48, ex 48.

—Se lee el artículo 49, ex 50.

Sr. Solana. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Neuquén.

Sr. Solana. — Señor presidente: en el inciso 2) de este artículo se habla del régimen vigente cada año para la distribución transitoria de recursos federales a las provincias, es decir que se reemplaza "impuestos" por "recursos federales". Yo voy a solicitar que se mantenga la redacción originaria, con la palabra "impuestos". Ocurre que las provincias patagónicas, por ejemplo, que no reciben aportes del Tesoro, que es un recurso federal, se verán injustamente disminuidas en la coparticipación.

Estas provincias —ya hemos reclamado insistentemente— se han visto perjudicadas por ser consideradas productoras de petróleo y no recibir los aportes del Tesoro; y si aquí se incluyen recursos federales, se contribuye a la disminución de los importes que correspondían en la respectiva distribución. Por eso so-

licito la utilización de la palabra "impuestos" en lugar de la expresión "aportes del Tesoro".

Sr. Trilla. — Dice "recursos federales"...

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Villada. — Señor presidente: deseo aclarar al señor senador Solana que, a mi entender, la expresión "recursos federales a las provincias" está bien utilizada porque, no existiendo un régimen de coparticipación, no podemos aquí hablar de impuesto.

En este momento existe un arreglo transitorio entre las provincias y la Nación a los efectos de concretar las transferencias del Estado nacional a las provincias. Si bien es indudable que aquí el impuesto es el fundamento, no podríamos hablar, precisamente, de impuesto ya que no existe un régimen de coparticipación sino de transferencia de fondos del Estado nacional a las provincias.

Por esta razón creo que los términos utilizados en la redacción son los correctos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Este asunto fue considerado en la comisión, y es uno de los artículos relacionados con el presupuesto, que hemos modificado para otorgar mayor claridad al tema de la coparticipación.

Como consecuencia del acuerdo existente entre la Nación y las provincias en cuanto a los aportes, se ha utilizado el término "recursos" porque, precisamente, uno de ellos tiene que ver con los impuestos correspondientes al Tesoro; pero, frente a las exigencias de las provincias o a los compromisos contraídos, puede recurrir a créditos o a otro tipo de fondos que no sean los impuestos.

Deseo que quede aclarado perfectamente este punto, y me alegra que el señor senador Villada coincida en que el término "recursos" es más amplio que "impuestos" y en que el Tesoro debe acudir a cualquier recurso con el fin de obtener los fondos necesarios para transferir impuestos.

Por otra parte, debo mencionar el agregado de la última frase de este artículo: "Los importes correspondientes al gobierno nacional serán destinados a la creación de un fondo para el mejoramiento de la infraestructura social". Esto fue resuelto en Diputados, a través de un acuerdo de miembros de todas las bancadas; pero aquí, al redactar el dictamen final, no lo incluimos. Sin embargo, creemos que este episodio debe quedar superado incluyendo la frase a que me he referido y que debe obrar en Secretaría.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: en la primera parte de este artículo se habla de un régimen de coparticipación definitiva y, en la última, de uno transitorio. El texto correspondiente dice que el 50 por ciento se atribuirá a las provincias en forma directamente proporcional a los importes que se le asignen a cada una de ellas en el régimen vigente cada año para la distribución transitoria de recursos federales. Actualmente hay un régimen vigente en forma transitoria, que ha sido establecido en un convenio financiero transitorio de distribución de recursos federales, celebrado el 11 de marzo de 1986 entre el presidente de la Nación y los gobernadores de las provincias y que, según he entendido, ha quedado aprobado por el artículo 51 de la ley de presupuesto vigente.

Creo que si hablamos de un régimen transitorio tendríamos que referirlo concretamente a ese convenio, para evitar algún problema de interpretación. Salvo que se entienda que con esta aclaración efectuada en el recinto —en cuanto a que al hablar de régimen transitorio nos estamos refiriendo a ese convenio— podría quedar salvada la inquietud al respecto.

Deseo saber si el señor miembro informante comparte el criterio de que estamos haciendo referencia a ese convenio entre el presidente de la Nación y los gobernadores, recogido en el artículo 51 de la ley de presupuesto vigente. Asimismo, deseo saber si estima conveniente incluir esto expresamente o si entiende que con esta aclaración queda salvado el problema.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Considero que está aclarado con lo que ha indicado el señor senador Menem.

Reitero que este aspecto fue muy discutido en la Cámara de Diputados.

Como vemos, dice aquí: "...se le asignen a cada una de ellas en el régimen vigente cada año para la distribución transitoria de recursos federales a las provincias". Si este año comienzan a recaudarse fondos por el blanqueo, será en virtud del acuerdo de este año, que regirá hasta que se firme el de 1987. Hemos incluido aquí algo muy importante, ajeno a la voluntad de los señores diputados, quienes no habían observado el tema; pero si lo hicieron los señores senadores quienes, por cierto, cualquiera sea la bancada a la que pertenecen, defienden bien los intereses provinciales. A tal punto es así que en la última reunión de bloque con el secretario de Hacienda, doctor Brodersohn, al considerarse este tipo de modificaciones a los efectos de compatibilizarlas con las propias necesidades de la Tesorería, defendieron los intereses provin-

ciales más que como lo hace en el recinto la oposición.

Agregamos la siguiente frase: "La distribución de los fondos se hará en forma automática en la medida de su percepción". O sea que se trata del mismo criterio que regía cuando funcionaba la vieja ley de coparticipación federal, hasta 1984.

De manera que entiendo que con esta aclaración queda subsanada la inquietud. Por otra parte, considero que esto ocurrirá solamente en esta última fracción de 1986, en que funcionará la distribución en virtud del acuerdo de este año; durante 1987 terminarán prácticamente los pagos, aunque haya prórroga y si fuera en 1988, ocurriría lo mismo.

Sr. Menem. — Está claro.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 49, ex 50, tal como figura en el dictamen de comisión.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba los artículos 50 y 51, ex 51 y 52.

—Se lee el artículo 52, ex 53.

Sr. Villada. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Villada. — Señor presidente: considero que la redacción de la última parte del ex artículo 53 no es correcta.

Dice que: "La fiscalización de la Dirección General Impositiva por parte del Tribunal de Cuentas, se realizará con posterioridad a los actos respectivos, mediante estados mensuales y su documentación probatoria..." Daría la sensación...

Sr. Trilla. — No encuentro lo que usted está diciendo.

Sr. Mauhum. — ¿Usted se refiere al artículo 39?

Sr. Villada. — Modifica el artículo 39.

Sr. Trilla. — Lo que ocurre es que no es el último párrafo del ex artículo 53, ya que hay varios puntos más.

Ya lo localicé.

Sr. Britos. — Es la primera vez que han coincidido. (Risas.)

Sr. Villada. — Propongo que modifiquemos ese texto por el siguiente: "La fiscalización de la ejecución del presupuesto administrativo de la Dirección General Impositiva por parte del Tribunal de Cuentas, se realizará con posterioridad a los actos respectivos, mediante estados mensuales y su documentación probatoria, sin perjuicio de las facultades que le otorga la ley de

contabilidad a la Contaduría General de la Nación".

Con esta nueva redacción no le quitamos facultades al Tribunal de Cuentas para que únicamente pueda fiscalizar la ejecución del Presupuesto de Gastos y Recursos de la DGI. Porque puede haber muchos actos y hechos administrativos que deban ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas de la Nación.

Con la redacción que tiene el proyecto, únicamente debe limitarse a Recursos y Gastos, y luego el Tribunal no podrá intervenir en todo lo que hagan los funcionarios de la Dirección General Impositiva.

De tal manera que con la redacción que propongo, estarían contempladas todas las facultades que tiene otorgadas en este momento el Tribunal de Cuentas de la Nación. Creo que el texto es parecido; cambiarían unas palabras, pero dándole un sentido totalmente diferente.

Sr. Trilla. — Podemos aceptarlo.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 52, ex 53, según el dictamen de la comisión y con la modificación propuesta por el señor senador por Salta y aceptada por el señor miembro informante.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba el artículo 53, ex 54, con las modificaciones introducidas en el dictamen.

—Se lee y aprueba el artículo 54, ex 55.

—Se lee y aprueba el artículo 55, ex 56, con la modificación introducida en el dictamen.

Sr. Presidente. — En consideración el capítulo V del dictamen que está agregado a continuación del nuevo artículo 55.

Sr. Trilla. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

Sr. Trilla. — Señor presidente: observamos que en el inciso c) de uno de los artículos se autoriza la inversión de los dineros blanqueados para la adquisición de bienes de uso nuevos, excluidos los automóviles. Esto da lugar a que se abarquen todos aquellos bienes de uso para la industria y para el agro, pero no queda en claro que puede tratarse de galpones, por ejemplo, del parque industrial en sí o de los edificios.

Entonces, proponemos un inciso h) que tendría esta redacción: "h) Construcción de edificios y galpones, incluyendo sus instalaciones, destinados a ser afectados como bienes de uso de la empresa".

Sr. Brascesco. — Señor presidente: solicito que se ponga a votación.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el capítulo V del dictamen de comisión, con la modificación propuesta por el señor miembro informante.

—La votación resulta afirmativa.
—El último artículo es de forma.

Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley¹. Vuelve a la Honorable Cámara de Diputados.

Sr. Trilla. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

Sr. Trilla. — Señor presidente: en primer lugar, deseo destacar la predisposición absoluta por parte de todos los presidentes de bloque, quienes coincidieron en la necesidad y la urgencia de la aprobación de este proyecto de ley y, al mismo tiempo, el tratamiento que han realizado sobre el tema, con los estudios pertinentes, todos los señores senadores.

Además, quiero solicitar a la Presidencia que, a través de la Secretaría, envíe lo más urgentemente posible, en el día de hoy, este expediente a la Cámara de Diputados a fin de que puedan tratar este asunto en el día de mañana.

Por último, solicito que se inserte en el Diario de Sesiones un estudio técnico sobre la ley, que no he mencionado en mi discurso.

Sr. Presidente. — Se va a votar el pedido de inserción formulado por el señor senador por la Capital.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia¹.

4

MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Brasesco. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Señor presidente: deseo formular un pedido, previo intercambio de opiniones con los presidentes de bloque y con el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

En el día de la fecha tuvo entrada la sanción de la Cámara de Diputados por la cual se crea el fondo de garantía de créditos laborales, que fue aprobada por unanimidad.

Solicito que en el día de mañana, cuando se terminen de tratar las preferencias, se considere sobre tablas este tema, debido a su importancia y sumado a ello el hecho de que no hay discrepancias ni de forma ni de fondo.

—Hablan varios señores senadores a la vez.

Sr. Presidente. — En consideración la moción formulada por el señor senador por Entre Ríos. Tiene la palabra el señor senador por Neuquén.

Sr. Solana. — Señor presidente: voy a solicitar que a continuación de la preferencia acordada para el día de mañana se incluya...

Sr. Presidente. — La Presidencia informa que primero corresponde votar la preferencia.

Sr. Leconte. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — ¿Es para referirse a este tema?

Sr. Leconte. — Señor presidente: antes de votar y dada la urgencia del caso, teniendo en cuenta que existe criterio unánime, si es posible solicito que hoy mismo nos entreguen una fotocopia del proyecto a los efectos de analizarlo con toda seriedad, aunque tengamos que trabajar toda la noche. Sólo de esa manera podremos efectuar su consideración con el debido conocimiento antes de su votación.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia formulada por el señor senador por Entre Ríos.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobada la preferencia.

5

MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Solana. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Neuquén.

Sr. Solana. — Señor presidente: solicito que a continuación de las preferencias ya acordadas, se trate el Orden del Día N° 585 —que se encuentra preparado para su publicación—, que se refiere a un proyecto de ley venido en revisión relacionado con la extensión del plazo acordado a mercaderías que se encuentran bajo el régimen de importación temporaria en la provincia de Neuquén, pertenecientes a la Seismograph Service Corporation, las que una vez cumplido el destino al que están asignadas van a ser despachadas a plaza para ser utilizadas en la provincia de Neuquén.

¹ Ver el Apéndice.

11

Restitución de un inmueble a la Municipalidad de Río Cuarto

—El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la página 4239.

12

Suspensión de la venta de bienes de la Flota Fluvial del Estado Argentino

—El texto de la comunicación aprobada es el que figura en la página 4241.

13

Juramento de fidelidad a la Constitución Nacional

—El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la página 4243.

14

Inclusión del cuerpo de guardaparques nacionales en el régimen previsional del decreto ley 15.943

—El texto del proyecto de ley aprobado es el que figura en la página 4244.

II

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR TRILLA

Normalización tributaria, regularización impositiva, condonación de sanciones y remisión de intereses

Antecedentes

Son numerosos los antecedentes existentes en nuestro país sobre regímenes de normalización tributaria, regularización, condonación de sanciones y remisión de intereses.

En algunas oportunidades estas medidas han sido tomadas como consecuencia de las necesidades de tesorería. En otras la línea argumental ha pasado por otros conceptos tales como la necesidad de reordenar el sistema o sentar las bases para una política tributaria más ordenada y acorde con la estructura económica financiera de las empresas del país.

También numerosos países extranjeros han apelado a este tipo de medidas con el objeto de reordenar sus economías o poner un manto de olvido sobre situaciones pasadas.

Así podemos citar los casos de España e Italia que oportunamente aplicaron medidas de esta naturaleza.

En nuestro país podemos citar entre otras las siguientes disposiciones legales referidas a temas de igual o similar característica al que hoy estamos tratando. Así tenemos: decreto-ley 4073/56; decreto 6.480/62 y leyes 18.529, 19.146, 20.352, 21.589, 22.681 y 23.029.

El proyecto del Poder Ejecutivo

El proyecto del Poder Ejecutivo tenía los siguientes títulos y capítulos a saber:

Título primero de normalización tributaria con los siguientes capítulos:

CAPÍTULO I. — Régimen de normalización de los impuestos a las ganancias, sobre los beneficios eventuales, sobre los capitales, sobre el patrimonio neto y otros impuestos menores.

CAPÍTULO II. — Régimen de normalización de los impuestos al valor agregado e impuestos internos.

CAPÍTULO III. — Régimen de condonación de sanciones y remisión de intereses.

CAPÍTULO IV. — Normalización de Títulos de la Deuda Externa.

CAPÍTULO V. — Disposiciones generales.

Título II. — Modificaciones a la ley 11.683. Trata un régimen de autarquía para la Dirección General Impositiva y otras modificaciones a diversos artículos.

Título III. — Modificaciones a la Ley de Impuesto de Sellos.

Título IV. — Régimen de empadronamiento general.

Título V. — Vigencia.

El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados se introdujeron numerosas reformas que, en sus aspectos generales no han cambiado la estructura del proyecto pero que en conjunto han significado cambios de real significación. Muchas modificaciones se han realizado mejorando la técnica legislativa, en otros obediendo a cuestiones conceptuales que resultaban necesario definir —tal el caso de la eliminación del capítulo IV del título I referido a Normalización de Títulos de la Deuda Externa— y en otros en la búsqueda de una mejor posibilidad de administrar el sistema tributario por parte de la Dirección General Impositiva.

El criterio de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Cámara

Pese al escaso tiempo transcurrido entre la fecha de ingreso de este proyecto y el momento en que lo estamos considerando hemos realizado un intenso y profundo estudio que nos ha permitido formular algunas propuestas de modificaciones que entendemos sustanciales para darle una mayor claridad y equidad y, además, en la búsqueda de incentivar las inversiones productivas y de reactivación del aparato productivo del país.

Los principales aspectos que se proponen introducir y que sometemos a consideración de la Honorable Cámara son, en general, los siguientes:

— La escala de determinación del impuesto ha sido corregida a los fines de darle equidad. De

tal forma el contribuyente de menor cuantía tiene la oportunidad de solucionar su situación y se incorpora a la escala de las personas físicas y sucesiones indivisas a las sociedades comprendidas en el tercer párrafo del artículo 1º de la ley —sociedades de hecho, sociedades colectivas, etcétera— en razón de que las rentas que se exterioricen pertenecen a los socios. La alícuota oscila entre el 2 % y 10 % —el proyecto aprobado en la Honorable Cámara de Diputados tenía el 12 %— y la tasa para sociedades sujetos del impuesto a las ganancias es igual a la alícuota marginal máxima es decir el 10 %.

- Se señala que la Dirección General Impositiva está facultada para otorgar planes de facilidades de pago pero propicia agregar que las cuotas serán actualizables y la tasa de interés no podrá exceder la establecida para deudas actualizables.
- Se elimina el inciso b) del artículo 28 con lo cual pueden ser normalizados los montos de impuesto al valor agregado percibidos por los contribuyentes sustitutos.
- El último párrafo del inciso b) del artículo 29 ha sido redactado nuevamente en razón del evidente error que en el mismo se había deslizado y en el inciso d) se ha elevado la rebaja o porcentaje de reducción a 55 %.
- Se propone introducir al artículo 36 una modificación que es de estricta justicia. En efecto tratándose de deudas firmes al momento del envío del proyecto por el Poder Ejecutivo al Honorable Congreso los contribuyentes no pueden normalizar su situación y en consecuencia deben abonarlas en su totalidad. Por ello se ha dispuesto eliminar la actualización de los anticipos y establecer una reducción del monto de la obligación impositiva.
- La reforma que se propone al artículo 41 es de características similares a la señalada en el punto anterior. Se trata de establecer una reducción del impuesto para los contribuyentes que no debiendo normalizar, por no tener rentas no declaradas, no obstante ello tienen diferencias en los impuestos sobre capitales y patrimonio neto.
- En cuanto a los cambios introducidos al artículo 42 tienen por objeto establecer un principio de equidad y además posibilitar el acogimiento a la normalización. En efecto se propone atenuar la carga tributaria de los períodos posteriores al de la normalización al agregar que también quedan librados los intereses y actualizaciones no ingresados correspondientes a an-

ticipos del impuesto al valor agregado y de declaraciones juradas de impuestos internos, por vencimientos producidos hasta el 31 de octubre de 1986 en ambos casos.

- Con el objeto de canalizar o inducir hacia inversiones que reactiven el aparato productivo, se propone la incorporación de un nuevo capítulo que propicia una rebaja del impuesto especial en la medida en que las disponibilidades en australes o en moneda extranjera, que se exterioricen, sean destinadas a los fines y objetivos previstos en dicho capítulo.

Modificaciones a la ley 11.683

La ley 11.683, de procedimiento tributario, es objeto de una propuesta de reforma con el objeto de acordarle la autarquía a la Dirección General Impositiva y en consecuencia se acuerdan atribuciones y responsabilidades al director general de la repartición acordes con el fin perseguido.

No obstante compartir en su totalidad el proyecto proponemos dos reformas para un mejor ordenamiento de la administración, a saber:

- Al proponerse la modificación del artículo 6º de la citada ley de procedimiento 11.683 —artículo 52 del proyecto punto 4— se propicia agregar al inciso i) que la facultad otorgada sólo podrá ejercerse en la medida que estuviere también acordada al Poder Ejecutivo nacional.
- En igual norma pero referida al inciso j) se excluye de la facultad otorgada, la venta de inmuebles.

Modificaciones a la Ley de Impuesto de Sellos

En el título III del proyecto —modificaciones a la Ley de Impuesto de Sellos— se establece la gravabilidad, con un impuesto proporcional del 60 por mil anual, de las operaciones financieras en las cuales no intervengan las entidades regidas por la ley 21.526 y sus modificaciones, estando el impuesto a cargo del deudor o tomador.

La amplitud utilizada en la definición del hecho imponible hace que queden sujetas a este gravamen todas las operaciones de ahorro y préstamo para fines determinados efectuadas con la intervención de las entidades regidas por el decreto 142.277/43, sus modificaciones y disposiciones complementarias.

Teniendo en cuenta que la aplicación de este tributo sobre las citadas operaciones no es el motivo que dio origen a esta reforma, resulta necesario evitar tal situación. A tales efectos se propone, además de rebajar la tasa propuesta del 60 por mil al 30 por mil, eximir las operaciones comprendidas en el artículo 93 de la ley 11.672.